

DICTAMEN NÚMERO DIEZ

**CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-**

Quienes integramos la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 1, 4, 35, fracción II, 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartados A y B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 35, fracción VII, 36, fracciones I y III, inciso a), 45, fracción VII, y 46, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y 35 BIS, numeral 1, incisos f), g) e i), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a su consideración el siguiente Dictamen relativo al **"CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RI-47/2020 Y ACUMULADOS DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; RELATIVO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNIDADES LGTBTTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS JUVENTUDES"** al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos:

GLOSARIO

Comisión de Igualdad	Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.
Consejo General	Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Constitución General	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Diario Oficial	Diario Oficial de la Federación.
Instituto Electoral	Instituto Estatal Electoral de Baja California.
INE	Instituto Nacional Electoral.
LGBTTIQ+	Personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer.
Ley de Partidos	Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.
Ley para la Protección	Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Baja California.
Ley General Electoral	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General para la Inclusión	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley General	Ley General de Partidos Políticos.
Lineamientos	Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California.

Unidad de Igualdad	Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Suprema Corte	Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tribunal Local	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

ANTECEDENTES

1. El 30 de noviembre de 2020 en Sesión Extraordinaria del Consejo General fue aprobado el Dictamen número siete de la Comisión de Igualdad, relativo a los "Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Baja California".

2. El 8 de enero de 2021 el Tribunal Electoral, emitió Sentencia Definitiva dentro del expediente **RI-47/2020** y acumulados, relativo al Recurso de Inconformidad, en cuyos puntos resolutivos estableció:

" [...]

Segundo. Son fundados los agravios que contravienen las acciones afirmativas implementadas para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Jóvenes, por lo que para dejar sin efectos los artículos 20, 23 y 30, de los Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, en Baja California".

Tercero. Es fundada la omisión del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de analizar y, en su caso, implementar una acción afirmativa en favor de la Comunidad LGBTI+ que garantice sus derechos políticos-electorales de votar y ser votada.

Cuarto. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, que analice y, en su caso, implemente acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTI+, personas con discapacidad y jóvenes, en los términos de la presente sentencia.

[...]

3. El 12 de enero de 2021 el Consejero Presidente, mediante oficio **IEEBC/CGE/090/2021**, turnó a la Comisión el oficio **TJEB CSG-NA-IMP-RI-02/2021** suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, así como la Sentencia emitida dentro del expediente **RI-47/2020** y acumulados, relativo al Recurso de Inconformidad, a fin de atender y dar

cumplimiento de la misma, en los términos que han quedado precisados en el punto que antecede.

En la fecha antes referida y a fin de estar en aptitud de adoptar las medidas pertinentes que permitan a este Instituto Electoral dar cumplimiento a dicha Sentencia, este órgano electoral promovió ante el Tribunal Electoral, Incidente de Aclaración de Sentencia, a efecto de que la autoridad jurisdiccional, se sirva aclarar lo siguiente:

[...]

"...Por tanto, solicitan se aclare si el contenido del Considerando 8.2 de la Sentencia debe cumplirse en el sentido que las y los ciudadanos habitantes del municipio de San Quintín tendrán, o no, restringido su derecho al voto en la elección de municipales de Ensenada en el presente Proceso Electoral Local 2020-2021, ya que consideran que por un lado, en la sentencia se ordena implementar acciones afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas asentadas en Ensenada, pero por otro lado, se restringe la participación de esos pueblos asentados en el nuevo municipio de San Quintín, para votar y ser votados en las elecciones de municipales de Ensenada..."

4. El 13 de enero de 2021 fue recibido en Oficialía de Partes del Consejo General el Oficio número INE/JLE/BC/VE/0079/2021, suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California, por virtud del cual remite a este órgano electoral, el Estadístico del Padrón Electoral el cual asciende a 2'914,479 registros y de la Lista Nominal de 2'870,728 electores.

5. El 14 de enero de 2021 la Comisión de Igualdad, celebró Reunión de Trabajo con el objeto de analizar y discutir el proyecto de cronograma de actividades para dar respuesta a la Sentencia en el expediente RI-47/2020, para la implementación de Acciones Afirmativas a favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Comunidad LGTBTTIQ+, Personas con Discapacidad y Jóvenes; evento al que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera.

Por parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales, el Consejero Electoral Daniel García García. De igual forma asistieron los CC. María Elena Camacho Soberanes y María Loreto Figueroa Coronado como representantes de los Partidos Políticos, del Trabajo y de Baja California, respectivamente.

En la misma fecha y mediante oficio **UISyND/006/2021** la Titular de la Unidad de Igualdad solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, le fuese proporcionada la información relativa al registro de candidaturas postuladas para los cargos de elección popular de los 2 Procesos anteriores, lista de candidatas y candidatos que se encuentran dentro de los grupos de situación de vulnerabilidad, jóvenes, personas con discapacidad y de personas identificadas como integrantes de la comunidad LGTBTTIQ+.

6. El 15 de enero del 2021 mediante oficio **UISyND/007/2021** la Titular de la Unidad de Igualdad, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, le fuese proporcionada la información relativa a las **Bases de Datos** que sirvieron para realizar el "**Estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016**", concretamente las Bases a escalas geo-electorales que se mencionan en el apartado de "metodología", datos censales (2010); datos intercensales (2015) y Bases de datos obtenida del cruce de datos con el Distrito Local.

En la fecha antes referida y mediante **IEEBC/SE/254/2021** fue solicitado al Coordinador Estatal de Baja California del **INEGI**, información concerniente a escalas geo-electorales, de las Poblaciones indígenas; personas con discapacidad; joven en rangos de edad 19 a 29 años; y de la LGTBTTIQ+, todas del estado de Baja California.

7. El 19 de enero de 2021 el Secretario Ejecutivo, mediante oficio **IEEBC/SE/315/2021**, se turnó a la Comisión el oficio **CPPyF/027/2021** suscrito por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, por virtud del cual remite la información que fue solicitada mediante oficio **UISyND/006/2021**, misma que se precisa en el antecedente 5, tercer párrafo del presente Dictamen.

En la fecha antes referida y mediante Oficio **IEEBC/DPE/034/2021** la Titular Ejecutiva del Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, remitió por medio de correo electrónico institucional de la Titular de la Unidad de Igualdad, la información relativa al **Estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016**.

8. El 22 de enero de 2021 esta autoridad electoral, fue notificada de la Sentencia Interlocutoria, emitida por el Tribunal Electoral, en la cual resolvió el Incidente de aclaración de Sentencia dictada dentro del Recurso de Inconformidad RI-47/2020 y acumulados, que ha quedado precisado en el punto 3 del presente Dictamen.

9. El 22 de enero de 2021 y mediante **Oficio Número 1313.7/008/2021**, suscrito por el Coordinador Estatal de Baja California del **INEGI**, por virtud del cual da respuesta respecto de la información solicitada y proporcionando en formato Excel, la información con la que cuenta dicha dependencia siendo esta:

- Estimador de la población total en viviendas particulares habitadas;
- Estimador de total de población de 18 años y más;
- Porcentaje de población de 20 a 29 años;
- Porcentajes de la población que se considera indígena;
- Porcentaje de población de 3 años y más que habla alguna Lengua indígena.

Pero además señalando que no cuentan con el dato de la Población LGTBTTIQ+ en Baja California, y de manera adicional indica que se pueden obtener estadísticas de las características de las viviendas, de las personas e indicadores sociodemográficos entre otros.

De igual forma en la fecha antes referida y mediante oficio **UISyND/009/2021** la Titular de la Unidad de Igualdad, solicitó el apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a efecto de que le fuese proporcionada la información relativa a lista de candidatas y candidatos indígenas registrados y electos en los 2 procesos electorales anteriores, a efecto de estar en aptitud de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en el Recurso de Inconformidad RI-47/2020 y acumulados.

En la misma fecha la Comisión de Igualdad, celebró reunión de trabajo con el objeto de analizar y discutir los avances y diversos aspectos de las acciones afirmativas a favor de los Pueblos y Comunidades indígenas, comunidad LGTBTTIQ+, personas con discapacidad y jóvenes; reunión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera.

10. El 26 de enero de 2021 la Comisión de Igualdad, celebró Reunión de Consejeras y Consejero, integrantes de la Comisión con la Secretaria Técnica con el objeto de analizar y discutir, el avance del Proyecto de Dictamen diez a fin de la implementación de las acciones afirmativas a favor de los Pueblos y Comunidades indígenas, comunidad LGTBI+, personas con discapacidad y jóvenes; reunión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera.

En misma fecha el Secretario Ejecutivo, mediante oficio **IEEBC/SE/425/2021**, turnó a la Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación el oficio **CPPyF/037/2021** suscrito por la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, por virtud

del cual remite la información que fue solicitada mediante oficio **UISyND/009/2021**, misma que se precisa en el antecedente 8, tercer párrafo del presente Dictamen.

11. El 28 de enero de 2021 la Comisión de Igualdad, celebró reunión de trabajo con el objeto de analizar y discutir, el avance del proyecto de Dictamen Diez, a fin de la implementación de las acciones afirmativas a favor de los Pueblos y Comunidades indígenas, comunidad LGTBI+, personas con discapacidad y jóvenes; reunión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera. Por Parte del Consejo General, el consejero electoral Daniel García García.

De igual forma asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Alejandro Jaen Beltrán Gómez, Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, Luis Antonio Cañedo Angulo, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Miguel de Loera Guardado, Francisco Javier Tenorio Andujar, José Ricardo Muñoz Mata, Andrea Chairez Guerra, Pedro Manuel Athie García; de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social de Baja California, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, respectivamente.

Cabe señalar, que en dicha reunión los representantes de los Partidos Políticos manifestaron una serie de inquietudes sobre las acciones afirmativas que fueron expuestas, las cuales fueron atendidas en los casos que fueron procedentes.

12. El 29 de enero de 2021 la Comisión de Igualdad, celebró Reunión de trabajo con el objeto de analizar y discutir los avances y diversos aspectos de las acciones afirmativas a favor de los Pueblos y Comunidades indígenas, comunidad LGBTITIQ+, personas con discapacidad y jóvenes; reunión a la que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera.

13. El 31 de enero de 2021 la Comisión de Igualdad celebró Sesión de Dictaminación con el objeto de analizar, discutir, modificar y en su caso, aprobar, el proyecto de dictamen número Diez; evento al que asistieron por parte de la Comisión la Consejera Electoral, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad, Graciela Amezola Canseco, los Consejeros Electorales Abel Alfredo Muñoz Pedraza y Olga Viridiana Maciel Sánchez, en su carácter de Vocales y la Secretaria Técnica Judith Esmeralda Acosta Viera.

Por parte del Consejo General asistieron los Consejeros Electorales Lorenza Gabriela Soberanes Eguía y Jorge Alberto Aranda Miranda.

De igual forma asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Alejandro Jaen Beltrán Gómez, Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, Luis Antonio Cañedo Angulo, Salvador Miguel de Loera Guardado, Francisco Javier Tenorio Andujar, Andrea Chairez Guerra, Pedro Manuel Athie García; de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social de Baja California, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, respectivamente.

En virtud de lo anterior y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

Que el artículo 45, fracción VII, de la Ley Electoral determina que para el desempeño de sus atribuciones el Consejo General funcionará en Pleno o en Comisiones, siendo éstas de carácter permanente o especial, determinando que la Comisión de Igualdad es de carácter permanente.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 BIS, numeral 1, incisos f), g) e i), del Reglamento Interior, la Comisión de Igualdad goza de las atribuciones siguientes:

- f)** Conocer y dictaminar los lineamientos o criterios generales en materia de paridad de género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad para el registro de candidaturas en los procesos electorales;
- g)** Coadyuvar en la vigilancia de los procedimientos para la participación paritaria entre los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular en el estado, e
- i)** Impulsar acciones para promover la participación política de acuerdo con los principios de igualdad de género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el Consejo General como órgano superior de dirección es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas sus actividades, para lo cual aplicará en su desempeño la perspectiva de género, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Electoral.

De este modo, el Consejo General es competente para aprobar en definitiva el presente Dictamen en términos de lo previsto en el artículo 46, fracción II, de la Ley Electoral que establece como facultad de dicho órgano el aprobar los acuerdos que resulten necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral.

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE

II.1 Normativa General

Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución General señala que es derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley.

Adicional, el artículo 41, fracción I, de la Constitución General dispone que los partidos políticos son entidades de interés público, y en la postulación de sus candidaturas observarán el principio de paridad de género. Además, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Por otra parte, la Base V del citado artículo 41 de la Constitución General mandata que, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece dicha Constitución.

En este sentido, el Apartado C de la Base V aludida refiere que, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esa Constitución.

Por su parte, el artículo 7, numeral 5, de la Ley General Electoral establece que los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual forma, el artículo 26, numeral 2, párrafos segundo y tercero, de la Ley General Electoral, señalan que, en el registro de las candidaturas a los cargos de Presidente o Presidenta, Alcalde o Alcaldesa, Concejalías, Regidurías y Sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género, y que las candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria.

En ese sentido, el artículo 232, numerales 3 y 4, de la Ley General Electoral establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías, así como que el INE y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, y en caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

A su vez, el artículo 233 de la Ley General Electoral dispone que, de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución General.

Ahora bien, el artículo 3, numerales 3, 4 y 5, de la Ley General de Partidos determinan que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

Por otra parte, el Apartado B de la referida disposición de la Constitución Local establece que, la organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público, autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley Electoral.

Así mismo refiere, que el Instituto Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos previstos en la Constitución General y en la Constitución Local, de conformidad con la distribución de competencias que establecen las leyes de la materia

A su vez, el artículo 9 de la Ley Electoral dispone que los derechos político-electorales, se ejercerán sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad

humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y también se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por otra parte, el diverso 21, párrafo sexto, de la Ley Electoral, precisa que el Instituto Electoral deberá constatar que las postulaciones de candidaturas que realicen los partidos políticos permiten el cumplimiento del principio de paridad de género.

De esta manera, conforme con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Electoral son fines del Instituto Electoral los siguientes:

- a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;**
- b) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones;**
- c) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado;**
- d) Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;**
- e) Realizar los procesos de consultar popular, plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia;**
- f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política, y**
- g) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.**

Así, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 37 de la Ley Electoral, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores en materia electoral guíen las actividades de dicho órgano constitucional autónomo. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.

Dentro del marco competencial del Consejo General, la fracción II del artículo 46 de la Ley de Electoral, establece como atribución de dicho órgano la relativa a expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los términos siguientes:

Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Estatal, y fijar las políticas y programas de éste;

[...]

Por su parte, el artículo 139 de la Ley Electoral establece que, los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso y Ayuntamientos del Estado, señalando que el Consejo General tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, y que en caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

En ese contexto, el artículo 140 de la Ley Electoral determina que, de la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Electoral, deberá salvaguardar la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución Local, indicando que cuando el partido político o coalición participe con candidaturas en la totalidad de los distritos, ocho serán de un mismo género.

II.2 Marco Normativo Internacional de Pueblos y Comunidades Indígenas

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1º, inciso b) señala que son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que "las acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como lo son los derechos político electorales, no se considerarán como medidas de discriminación".

Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado su preocupación por el "número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México" y ha recomendado a México que "redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles

de la administración pública, [para lo que podría ser útil] la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa".¹

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, ha señalado al Estado Mexicano su preocupación por la escasa aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos.

El Comité recomienda al Estado Parte que refuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención y en su recomendación general número 25 (2004), sobre las medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la Convención en los que las mujeres tienen una representación insuficiente o se encuentran en situación de desventaja.²

Asimismo, el Comité observa con preocupación "La discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales"; por lo que exhorta al Estado Parte a que "Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afroamericanas, a presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales."³

Por su parte, el Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras consideraciones, alentar los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y étnico-racial, afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de los derechos de las mujeres que participan en política y condenar la violencia política.⁴

Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y político, por lo que la representación política de los distintos grupos es vital para el logro de una democracia inclusiva.⁵

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en conformidad con el artículo 9 de la Convención Observaciones finales para México, 80º período de sesiones, 2012, párr. 16

2 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe periódico de México, julio 2018, párr. 17, párr. 18.

3 Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe periódico de México, julio 2018, párr. 33 b), párr. 34 b).

4 Recomendación del Compromiso de Santiago, enero 2020, párr. 12.

5 Iguzo Isabel, Pueblos indígenas, democracia y representación: los casos de Bolivia y Guatemala, Boletín PNUD e Instituto de Iberoamérica, 2011, pág. 3.

Asimismo, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente y, por ello, su participación en los órganos cupulares de decisión resulta indispensable.

En un modelo democrático es necesario garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, por lo que es fundamental garantizar su participación efectiva en los procesos de decisión.⁶

II. 3 Marco Normativo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas

La Constitución General reconoce en su artículo 2º, párrafo primero, que México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena.

Por otra parte, la pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la Constitución General debe verse reflejada en el Congreso del Estado y los Ayuntamientos que lo integran, ya que son los órganos de representación de la ciudadanía.

Asimismo, el artículo constitucional en cita, en su apartado B, menciona que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

II.4 Marco Normativo Internacional de la Comunidades LGBTTIQ+

A nivel internacional, los convenios de protección de derechos humanos aún no tienen definiciones claras y contundentes acerca de cómo proteger a las poblaciones de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex (LGBTTIQ+), esto en tanto que los instrumentos internacionales vinculantes no

⁶ Herrán, Eric "Participación de grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de acciones afirmativas y en el diseño de políticas públicas". Documento de trabajo E-11-2016, Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 2006, pp. 75.

mencionan directamente aún la orientación o preferencia sexual y la identidad y/o expresión de rol de género.

Como antecedentes no vinculantes para México se encuentra la Declaración Internacional de los Derechos de Género⁷, la cual fue aprobada el 28 de agosto de 1993, por las personas asistentes a la segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Política de Empleo en Houston, Texas, EUA. Entre los derechos considerados se encuentra el derecho de las personas a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel de género, el derecho a determinar y modificar el propio cuerpo y el derecho a un servicio médico competente y profesional.

Así mismo, en noviembre de 2006, se formularon y adoptaron los Principios de Yogyakarta⁸, en Indonesia, en el que se hicieron explícitos derechos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Aun cuando dicha declaración no es vinculante para México, resulta relevante, pues define de manera clara los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la igualdad de género al reconocerse como tales:

- El derecho a la igualdad y la no discriminación;
- El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;
- El derecho a la vida;
- El derecho a la seguridad personal;
- El derecho a la privacidad;
- El derecho a no ser detenido arbitrariamente;
- El derecho a un juicio justo;
- El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente;
- El derecho a no ser sometida a torturas ni a penas, tratos crueles inhumanos o degradantes;
- El derecho a la protección contra todas las formas de explotación;
- El derecho al trabajo;
- El derecho a la seguridad social;
- El derecho a un nivel adecuado;
- El derecho a una vivienda digna;
- El derecho a la educación;
- El derecho a la salud;
- El derecho a la protección contra abusos médicos;

⁷ Documento consultable <https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Internacional-de-los-Derechos-de-Genero-No-vinculatoria.pdf>

⁸ Documento consultable <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docd=48244e9f2>

- El derecho a la libertad de expresión;
- El derecho de libertad de reunión;
- El derecho de libertad de pensamiento;
- El derecho de libertad de movimiento;
- El derecho a procurar asilo;
- El derecho a formar a una familia;
- El derecho a participar en la vida pública;
- El derecho a participar en la vida cultural; entre otros.

Así, aun y cuando los Principios Yogyakarta no tienen un carácter vinculante, éstos se han utilizado como referente esencial en la protección de los derechos de la población LGBTTIQ+, al ser adoptados como parámetros en el diseño e implementación de políticas públicas para la atención de las personas de la diversidad sexual; además, de que se recurre a ellos como costumbre internacional o fuente auxiliar del derecho internacional al incorporarse a la doctrina publicista de mayor competencia de las distintas naciones.

Continuando en el plano internacional, el 1º de diciembre de 2006, Noruega a nombre de 54 Estados de Europa, América -incluyendo México-, Asia y el Pacífico, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una declaración sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, en la que por primera vez se integró el tema de la identidad de género en una declaración entregada al órgano encargado de la cartera de los derechos humanos en las Naciones Unidas.

Con posterioridad, el 18 de diciembre de 2008, por iniciativa de Francia y con el apoyo de la Unión Europea, se presentó ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género⁹, la cual contó con el respaldo de 66 países de los 192 que en ese momento conformaban la comunidad internacional.

En esta temática, en el mes de junio del año 2013, en la ciudad de Antigua, Guatemala, las naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos aprobaron la **Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia**¹⁰ que, como instrumento vinculante para los Estados Parte, **por primera vez, reconoce, garantiza, protege y promueve el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género**, junto con el **derecho a la no discriminación por orientación sexual**, entre otros.

⁹ <https://www.unv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Sobre-Orientacion-Sexual-e-Identidad-de-Genero-de-las-Naciones-Unidas.pdf>

¹⁰ https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

En razón de lo anterior, es que esta autoridad electoral tiene en cuenta que ya desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género, adoptada el 17 de junio de 1995, se previó que a las personas de la diversidad sexual no se les pueden negar sus derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género, así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de habitación, sustento y demás exigencias de la vida.

Asimismo, es referencia que desde la declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes a los grupos LBGTTIQ+.

En la resolución A/HRC/RES/17/19¹¹ adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se realizará un estudio sobre dicha problemática.

En dicho informe¹² se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de Derechos Humanos *ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación sexual* y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.

El referido informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.

¹¹ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/79/PDF/G1114879.pdf?OpenElement>

¹² Informe de la Alta Comisionada de Derecho humanos consultable en la siguiente lga electrónica: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf

Entre sus recomendaciones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explícitamente recomendó que las naciones deben promulgar legislación amplia de lucha contra la discriminación que incluya la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género, así como que reconozcan las formas de discriminación concomitantes velando porque la lucha contra la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género pueda ser ejercida por estas personas como parte de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género.

El 23 de abril de 2012, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos presentó el documento solicitado sobre la situación de los derechos de las personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex; en dicho documento precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género: **toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de iure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades**, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.

En relación con la interpretación de las disposiciones y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puntualizó que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sostenido que la orientación sexual y la identidad de género se encuentran comprendidas dentro de la frase "otra condición social" establecida en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, toda diferencia de trato basada en la orientación sexual y la identidad de género es sospechosa y se presume incompatible con la Convención y cualquier Estado en este supuesto se encuentra en la obligación de probar que la misma supera el examen especialmente estricto que se utiliza para medir la razonabilidad de una diferencia de trato.

En el documento se subrayó que en relación con la orientación sexual y su vinculación con el derecho a la vida privada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de un individuo que debe estar libre de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, que existe un nexo claro entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y plan de vida de un individuo, incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos, por lo que el derecho a la privacidad protege el derecho a determinar la propia identidad y a formar relaciones personales y familiares con base en esa identidad.

La Comisión Interamericana ha enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y determinar su propia identidad, así como campos de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quien, tales como sus decisiones, sus relaciones interpersonales, familiares y en su comunidad.

La organización Global Rights¹³ ha mencionado que las identidades políticas, sociales, sexuales y de género que abarcan las siglas LGBTI existen como concepto colectivo, el cual, ha sido reivindicado por algunas personas y grupos activistas en muchos países para afirmar sus demandas de reconocimiento, espacio y personería legal, esto es, ha sido utilizada con éxito para organizarse política, social y económicamente.

De igual modo, resulta relevante para este Instituto que conforme con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En relación con ello, se destaca que en los Principios de Yogyakarta se recomienda a los Estados que:

- I. Revisen, enmienden y promulguen leyes para asegurar el pleno goce del derecho a participar en la vida y los asuntos públicos y políticos, incluyendo todos los niveles de servicios brindados por los gobiernos y el empleo en funciones públicas (...), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y con pleno respeto a la singularidad de cada persona en estos aspectos;
- II. Adopten todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública; y,
- III. Garanticen el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género y con pleno respeto por las mismas.

¹³ Global Rights es una organización no gubernamental internacional dedicada a la creación de capacidad en materia de gobernanza y derechos humanos. <https://www.globalrights.org/ng/about-us/>

II. 5 Marco Normativo Nacional de la Comunidades LGBTTIQ+

El punto de partida para el diseño de las acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, se sustenta en que nuestra democracia contempla el reconocimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin distinción alguna y en condiciones de igualdad, y en su participación efectiva en la vida pública a través del sufragio para elegir a sus gobernantes así como en el derecho a ser votado, con la misma garantía de participación sin distinción, pues todas las personas tal y como lo mandata la Constitución General deben de gozar, de facto, de igualdad de derecho y libertades.

La Suprema Corte, al resolver el Amparo Directo 6/2008, señaló que la identidad de género se integra a partir no sólo de un aspecto morfológico sino, primordialmente, de acuerdo con los sentimientos y convicciones más profundas de pertenencia o no al sexo que le fue legalmente asignado al nacer y que será de acuerdo con ese ajuste personalísimo que cada sujeto decida proyectar su vida, no sólo en su propia conciencia sino en todos los ámbitos culturales y sociales, de manera que, el derecho a la identidad personal es aquel que tiene toda persona a ser una misma, en la propia conciencia y en la opinión de los otros y, en consecuencia, las personas tienen derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los asignados al nacer no reflejan aquello que consideran su identidad.

La Sala Superior ¹⁴ en diversos criterios jurisprudenciales ha señalado que el reconocimiento de condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, justifica el establecimiento de medidas compensatorias (acciones afirmativas) para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan en el ejercicio de sus derechos para revertir esa situación de desigualdad.

¹⁴ **ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.**—De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación¹⁵ y la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Baja California¹⁶, son coincidentes en definir **la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades.**

El 22 de diciembre de 2016, el Consejo General del INE adoptó medidas para favorecer la inclusión de las personas de la diversidad sexual, a través del *Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas Trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en Todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana*; con el cual se buscaba establecer criterios de nivelación para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans, tales como otorgar un trato igual a todas la personas, no pedir pruebas de identidad o personalidad jurídica, no cuestionar a las personas sobre su identidad, dirigirse a las personas electoras por sus apellidos tal y como aparecen en la credencial para votar y llamar a las personas trans de acuerdo con su expresión de género.

En el marco de los compromisos que el INE tiene en favor de la inclusión y protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables como lo son las personas de la diversidad sexual, el 1º de julio de 2019, implementó el **Protocolo Trans para el personal de la institución** en el que estableció como medidas: el procedimiento de rectificación de identidad en el INE que incluye la modificación de su documentos y usuarios en los sistemas informáticos institucionales; el derecho a ser llamadas por el nombre y con los pronombres que elijan, sin necesidad de que su acta de nacimiento refleje su identidad de género; derecho a acceder libremente a las instalaciones del INE, aun cuando no cuenten con documentos que reflejen su identidad de género; derecho a no ser discriminadas por su expresión o identidad de género en la selección, ingreso, capacitación y profesionalización; derecho a un ambiente laboral libre de discriminación y violencia; derecho a la atención brindada por el servicio médico sin discriminación; derecho a que en el espacio laboral e instalaciones sean espacios libres de prejuicios de género y sin discriminación, entre otros.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos¹⁷ y el INE¹⁸, consideran que el Colectivo LGBTTI, se conforma por personas: **lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersex**; sin embargo, se debe de considerar que dentro de la misma población LGBTTI, es común observar la letra y símbolo "Q+", que significa Queer y el símbolo más que refiere a la apertura a la diversidad sexual ya que a través

¹⁵ Artículo 1.

¹⁶ Artículo 6.

¹⁷ Disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonasgbti.pdf>

¹⁸ Disponible en <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf>

del tiempo se ha ido incrementando y sumando personas que se auto adscriben a dicho sector de la población.

En México, los informes relativos a la discriminación sobre este sector de la población son preocupantes de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su ficha temática sobre las personas (LGBTTIQ+), conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, casi dos millones setecientas mil personas declaran en el país no ser heterosexuales, lo que representa el 3.2 % de la población nacional, pero dicha institución estima que este porcentaje puede ser mayor al ser probable que, dados los prejuicios sobre la diversidad sexual, muchas personas no hayan compartido abiertamente su orientación sexual.¹⁹

En la ficha temática se apunta que conforme con un estudio demográfico realizado por académicas de la UNAM y el Colegio de México, A.C. (COLMEX), se muestra que en México para el año 2010, había 229,473 hogares liderados por parejas del mismo sexo y que tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e hijas. Tales datos son indicativos de la necesidad y pertinencia de adoptar medidas para garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a estos colectivos de la población.

En ese sentido, esta autoridad electoral, estima prioritario y de suma relevancia la adopción de una acción afirmativa que construya escenarios que tornen viable que las personas de la diversidad sexual, como grupo poblacional, puedan acceder a la representación política en el Estado, en la inteligencia que al ser los Ayuntamientos los órganos que representan la pluriculturalidad en cada Municipio, deben procurarse de instrumentos que promuevan la inclusión de este sector de la población y, en relación con ello, la acción afirmativa es la vía idónea para propiciar que puedan participar de la vida política de la sociedad, a efecto de lograr en su favor un estándar de inclusión de representación y con ello, puedan impactar en el aspecto político, social, cultural, económico y en cualquier ámbito de importancia para sus proyectos de vida.

Como antecedentes, se cuenta con la medida adoptada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el que a través del Acuerdo del Consejo General IEEPCO-CG-32/2018 posibilitó que se presentarán candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, y para garantizar el ejercicio de derechos político-electorales de estas personas estableció que la candidatura correspondería al género que la persona se autoadscribiera y en esos términos sería

¹⁹ https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis/2017_resultados.pdf

tomada en cuenta para la observancia del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas.

(...)

22. *Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos, en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate...*

Dicho acuerdo fue controvertido y la Sala Superior en el Juicio para la protección de los derechos políticos electorales **SUP-JDC-304/2018** y sus acumulados, en relación con la protección de los derechos políticos de las personas trans estableció que:

"295 De todo lo expuesto con anterioridad, es posible extraer las siguientes premisas:

(i) La identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que a través de la expresión de género se exterioriza para que una persona pueda ser percibida como tal frente a la sociedad;

(ii) Las recomendaciones internacionales y los criterios de los tribunales constitucionales han pugnado por señalar que basta la autoadscripción a un género determinado para que el Estado deba reconocer esa situación.

(vi) Las personas LGBTI tienen derecho a que el Estado adopte **acciones positivas** o de **igualación positiva**, que tengan por objeto **permitir el acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables** y el resto de la población; siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables.

296 Para efectos del presente estudio, conviene traer de nueva cuenta el texto aprobado por el Consejo General del Instituto Local en los Lineamientos:

"En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate."

297 En primer lugar, se considera que la determinación adoptada por la autoridad electoral es una medida objetiva y razonable que tiene por objeto eliminar barreras de acceso a la postulación de cargos de elección popular, respecto de un grupo históricamente vulnerable y marginado de la vida política.

298 Siendo importante señalar que, la medida no establece la creación de una cuota diferenciada, sino que permite la postulación de candidatos intersexuales, transexuales, transgénero o muxes dentro de la cuota reservada para hombres o mujeres, en función del género con el cual se identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública.

299 Así, se advierte que dicha medida es acorde con las obligaciones del Estado en cuanto a adoptar las medidas necesarias para impulsar la participación de grupos no visibilizados pero participantes de la política local, como puede ser el colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una efectiva participación y potencia el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la vertiente de ser postulados y votados a un cargo de elección popular.

300 Lo anterior es así, porque -como quedó señalado con anterioridad- el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, protege tanto a personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las discriminaciones estructurales que operan en contra de aquéllos, con el objeto de que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra índole que les impidan gozar a plenitud del resto de derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor, que en el caso concreto, se traducen en los obstáculos históricos, políticos y sociales que han enfrentado en su condición de indígenas y de personas transgénero.

301 Ahora bien, la medida prevista por los lineamientos en materia de paridad establecida por la responsable es un derecho en favor de la postulación de ciudadanos que se autoadscriben a un género, que tiene como finalidad que personas intersexuales, transgénero, transexuales y muxes accedan de forma efectiva a la vida política de la comunidad y, particularmente, a cargos al interior de los ayuntamientos.

302 Por ello, el aspecto esencial que debe determinarse reside en establecer si la sola manifestación de una identidad de género basta para que la persona interesada debe ser considerada, dentro de las candidaturas del género al que dice pertenecer.

303 Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que **la manifestación de pertenencia a un género es suficiente** para justificar la autoadscripción de una persona. Por lo que, bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción manifiesta.

304 Se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el Estado Mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la justicia sino a condiciones dignas de vida que permita el ejercicio pleno de sus derechos y, entre ellos, los derechos político-electorales, el Estado se encuentra obligado a preservar los principios constitucionales que rigen en la renovación de los órganos de representación nacional, y, de manera particular, el principio de paridad de género.

305 En este sentido, se considera que el Estado debe garantizar que los lugares sean ocupados por personas que de forma auténtica se autoadscriban a tal condición, pues ello es lo que fortalece la irradiación del principio de representatividad y composición pluricultural, pues de llegar a ser electos, éstos representarán no sólo a sus comunidades sino, especialmente, a la comunidad trans, garantizando que los electos representarán los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción potenciadora.

306 Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1; 4; 35, fracción II, y 41, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, así como al derecho al voto pasivo, teniendo las calidades que establezca la Ley, pero también se encuentran sujetas a la prohibición de realizar alguna discriminación por razón de género.

[...]

312 En efecto, en el artículo 5 del ordenamiento legal de referencia, se señaló que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos, ni aquellas distinciones basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

313 De ahí que sea obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus atribuciones, garantizar el pleno ejercicio de esos derechos en armonía con los principios constitucionales y demás derechos previstos en el orden constitucional.

314 En ese estado de cosas, si bien es cierto que la autoadscripción de género como parte del libre desarrollo de la personalidad, y del ejercicio del derecho a la autodeterminación de las personas constituye un elemento de la mayor relevancia para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, también lo es que, tratándose de aquellos supuestos en los que, su ejercicio exceda el ámbito personal y de reconocimiento del Estado, como lo es el relativo a ser votado, las autoridades se encuentran obligadas a proteger tanto el interés público, los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico, y los derechos de los demás.

[...]

317 Lo anterior toda vez que este tipo de medidas tienen como finalidad dotar de certeza a los contendientes, autoridades y al electorado, respecto de la observancia plena a los principios que rigen las elecciones y, de manera particular, al principio constitucional de paridad, ya que las postulaciones entre hombres y mujeres siempre deben privilegiar el acceso a la igualdad real de oportunidades, con independencia del género al que se autoadscriban.

318 Así, si bien es cierto que el acta de nacimiento rectificada por cambio de sexo es el documento que otorga el reconocimiento del Estado a la expresión de género con el que una persona se autoadscribe en los planos subjetivo y exterior, lo cierto es que, para este órgano jurisdiccional, el exigir la presentación de esta documental para el registro a una candidatura de elección popular en el género al que se autoadscribe, puede traducirse en una carga desproporcionada.

319 Ello, porque si bien existe una obligación a cargo del Estado Mexicano de reconocer la identidad de género sin más requisito que el de autoadscripción, en realidad se trata de un trámite administrativo que no se encuentra disponible en la mayoría de las entidades federativas¹⁸⁸¹ (incluyendo Oaxaca) o, en el mejor de los casos, no exento de condiciones que los sujeten a la valoración de pruebas médicas, psicológicas, psiquiátricas, genéticas, endocrinológicas que, por su naturaleza, los vuelven trámites discriminatorios, costosos e inaccesibles.¹⁸⁹¹

320 En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que, en el caso, bastaba la autoadscripción para que la autoridad responsable procediera al registro de las candidaturas en las condiciones relatadas.

323 Así, resulta necesario señalar que la autoadscripción como elemento esencial de identidad para que el registro de una candidatura sea computada en espacios destinados a un género específico, no se traduce en una afectación al principio de paridad de género, pues el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el reconocimiento a la identidad de género, a partir de la manera en que cada persona se autopercibe.

324 Por lo que, como se estableció con anterioridad, este órgano jurisdiccional considera que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar su registro dentro de las candidaturas del género afín.

325 Sin embargo, dada la obligación del Estado de proteger la paridad en la postulación de las candidaturas, es necesario que esa manifestación se encuentre libre de vicios y que sea acorde con la finalidad perseguida por el Constituyente. Esto es, que la integración de los órganos de gobierno de representación popular permita la inclusión de hombres y mujeres, en observancia al principio de paridad.

327 En ese sentido, las autoridades encargadas de la organización y calificación de los comicios, se encuentran vinculadas a respetar la autoadscripción de género de las personas, en atención a la obligación del reconocimiento de la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

328 Sin embargo, frente a existencia de elementos claros, unívocos e irrefutables, de que alguna manifestación de autoadscripción de género se emitió con la finalidad de obtener un beneficio indebido, en perjuicio de los bienes y valores protegidos en el orden constitucional, en particular, los relativos a la paridad de género, la certeza y al de autenticidad de las

elecciones, el órgano electoral se encuentra obligado a analizar la situación concreta, a partir de los elementos con los que cuente, sin imponer cargas a los sujetos interesados y mucho menos generar actos de molestia que impliquen la discriminación de la persona que aspira a ser registrada a una candidatura.

329 Al respecto, esta Sala Superior ha considerado que el Estado mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables, y como personas integrantes de la sociedad mexicana, realizar la interpretación que más favorezca a las personas, a fin de evitar colocarlos en un estado de indefensión.

330 Se tiene que las personas transgénero se les considera un grupo vulnerable, por lo que la autoridad está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su situación de desventaja, sin embargo, tratándose de la postulación de candidaturas a cargos representativos de elección popular, es necesario que no existan elementos evidentes que resten certeza a la autenticidad de la adscripción de género al que afirman pertenecer.

331 Ello es así, en razón de que el efecto que se genera con el registro atinente, no se limita a garantizar su libertad para autodefinirse o considerarse de un género específico, sino que trasciende al interés público, precisamente porque la finalidad del registro es la de representar a la ciudadanía en los órganos de gobierno, y su postulación incide o afecta en el número de las candidaturas del género al que se adscribe cada persona, ya que disminuye el número de lugares que, en principio, deberían ser ocupados por hombres o mujeres, según sea el caso.

332 Además de ello, solicitar una prueba a la autoadscripción, resulta conflictivo en términos de la certeza respecto de cuáles eran las reglas del juego al momento de los registros.

333 En efecto, los Lineamientos emitidos por el Instituto Local eran muy claros y lo único necesario para acreditar la identidad sexo-genérica era la autoadscripción, por lo que, en consecuencia, las personas en cuestión fueron registradas como mujeres puesto que así lo solicitaron al Instituto Local.

334 Lo que señala el artículo 16 de los lineamientos referidos, es:

En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate

335 En consecuencia, solicitar que tal condición se acredite con un acta de nacimiento rectificada o con un comportamiento social determinado es, además de discriminatorio, en este caso, retroactivo y, por tanto, inconstitucional.

336 Por otro lado, habría que tomar en cuenta que no todas las personas manifiestan su identidad sexo-genérica de la misma manera, por lo que no puede pretenderse que su manifestación responda a catálogos o criterios específicos que las autoridades puedan tomar como parámetros objetivos e irrefutables de la identidad.

337 En efecto, el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en la facultad legítima de cada persona de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. En ese sentido, cada persona desarrolla su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí misma tenga y de su proyección ante la sociedad.

338 Por ello, este órgano jurisdiccional considera que si la finalidad se sugiere última de que un hombre ocupe el espacio de una candidatura que corresponda ser computada a una mujer, o de que una mujer sea registrada en una candidatura que deba computarse dentro de las correspondientes a los hombres, es la de representar a la ciudadanía, y garantizar su inclusión respetando la identidad de género a la que afirman pertenecer, por lo que la manifestación que, de manera evidente carece de los elementos de espontaneidad, certeza, y libertad, es insuficiente para cumplir con el principio constitucional de paridad en la postulación de candidatos entre hombres y mujeres.

La Sala Superior, sostuvo que como principio y como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, entendida ésta de modo sustantivo y no solo formal; que a nivel nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la igualdad formal reconocida en el Sistema Jurídico resulta insuficiente para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables, es especial en el acceso a los cargos de elección.

Si bien, la ley debe ser un instrumento activo de la configuración de la política pública para reducir las brechas que separan a los grupos en situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para establecer reglas de paridad, **en virtud de que las autoridades electorales y partidos políticos tienen obligaciones en este tema** y, por tal razón, las condiciones sociales que son discriminatorias de ciertos grupos de población justifica el establecimiento de medidas compensatorias como son las acciones afirmativas.

La Sala Superior, consideró que en torno a los derechos de la población LGBTTIQ+, la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, de manera que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna

**Comisión de Igualdad Sustantiva y
No Discriminación**

al respecto. De igual manera citó que en diversas sentencias de Tribunales Constitucionales de diferentes países se ha señalado, que las personas no solo tienen el derecho de elegir aquella identidad de género o sexo con el que se sientan plenamente identificadas, sino que es deber del Estado, reconocer, garantizar y tutelar ese derecho, de tal forma que se potencialice el ejercicio de los derechos humanos de dichas personas.

Así mismo, sostuvo que la determinación adoptada por el Consejo General de Oaxaca, constituyó una medida objetiva y razonable que tuvo por objeto eliminar barreras de acceso a la postulación de cargos de elección popular, respecto de un grupo poblacional históricamente vulnerado y marginado de la vida política; que la medida adoptada no estableció la creación de una cuota diferenciada, sino que permitió la postulación de candidatos intersexuales, transexuales, transgénero o muxes dentro de la paridad de género en las candidaturas de mujeres y hombres, en función del género con el que se identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública y con base en esos elementos, concluyó que la medida fue acorde con las obligaciones del Estado en cuanto a adoptar medidas necesarias para impulsar la participación de grupos no visibilizados, pero participantes de la política local, como puede ser el colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una efectiva participación y potenciar el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la vertiente de ser postulados y votados a un cargo de elección popular.

Por otro lado, se tiene como único antecedente que a nivel nacional sólo en 13 entidades federativas las personas pueden realizar procesos legales para garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer su derecho a definir su identidad de género y la expresión de género conforme con su propia autopercepción, a saber: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala; lo que resulta relevante porque tiene implicaciones para el ejercicio de derechos, pues evidencia que dichas entidades federativas han avanzado en la implementación de las modificaciones de sus legislaciones para garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer en plenitud su derecho a la identidad de género, en la inteligencia que conforme con los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte y la Sala Superior antes reseñados, **la protección del derecho a la identidad de género y expresión de género, tratándose de personas de la diversidad sexual funge como base indispensable y necesaria para instrumentar la protección del ejercicio pleno de otros derechos como son los político-electorales.**

II.6 Marco Normativo Convencional de Personas con Discapacidad

El 8 de junio de 1999 el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referendum la **Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad**.

La Convención mencionada, fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 26 de abril de 2000, según Decreto publicado en el Diario Oficial del 9 de agosto de ese año. El instrumento de ratificación, firmado por el entonces Ejecutivo Federal el 6 de diciembre de 2000, fue depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el 25 de enero de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo X de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Por lo tanto, para su debida observancia, el 12 de marzo de 2001, en el Diario Oficial se publicó el Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1999.

De conformidad con el artículo 1º de dicha Convención, el término "**discapacidad**" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

El término "**Discriminación contra las personas con discapacidad**" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

No constituye discriminación, la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.

Posteriormente, el 30 de marzo 2007 el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referendum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006. La Convención en cita fue enviada a la consideración de la Cámara de

Senadores con la Declaración Interpretativa, así como su Protocolo Facultativo, siendo aprobados por dicha Cámara alta el 27 de septiembre de dos mil siete, según Decreto publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre de 2007.

El instrumento de ratificación, firmado por el entonces Ejecutivo Federal el 26 de octubre de 2007, fue depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de ese año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 9 de su Protocolo Facultativo, con la Declaración Interpretativa antes señalada.

Por lo tanto, para su debida observancia, en el Diario Oficial de 2 de mayo de 2008, se publicó el Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006 y en el mismo medio de difusión oficial de 8 de diciembre de 2011, el Decreto por el que se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la referida Convención, su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Dentro de los principios generales que rigen a la citada Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, son:

- a)** El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- b)** La no discriminación;
- c)** La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- d)** El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- e)** La igualdad de oportunidades;
- f)** La accesibilidad;
- g)** La igualdad entre el hombre y la mujer; y,
- h)** El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Para lograr lo anterior, los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna. A tal fin, los Estados Partes deben, entre otras acciones, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de diversa índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en esa Convención, artículo 4, numeral 1, inciso a).

Respecto a la **participación en la vida política y pública, en el artículo 29, inciso a), de la Convención, se establece que los Estados Partes deben garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, y se comprometen a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás**, directamente o a través de personas representantes libremente elegidas, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas, mediante:

- I) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
- II) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; y,
- iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electoras y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.

Como se ve, la obligación de incluir medidas afirmativas o cuotas para personas con discapacidad sólo emana de las Convenciones citadas, pero ello es suficiente como origen de las obligaciones que tenemos que cumplir todas las autoridades del Estado Mexicano como lo es este Instituto.

Ahora bien, según las estadísticas, de acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial, y frente a esta situación, el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, convirtiéndose ésta en la Primera Convención Internacional sobre derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI.

La adopción de este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad específicamente, así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.

El objetivo principal de este instrumento jurídico internacional, es cambiar el paradigma del trato asistencialista a las personas con discapacidad, permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, tanto exigiendo sus derechos como cumpliendo sus obligaciones como parte de la sociedad. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico.

Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades.

De ahí que el artículo 4, incisos a) y b) de la Convención, establecen que los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

- a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; y
- b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

II. 7 Marco Normativo Nacional de Personas con Discapacidad

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, cambió el modelo de la relación del derecho nacional con el internacional al establecerse en el artículo 1º la adición del segundo párrafo, en el sentido de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Esto es, **las autoridades mexicanas debemos velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución General, sino también en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano**, adoptando siempre la interpretación más amplia y favorable al derecho o derechos humanos de que se trate, lo que se entiende en la doctrina y por la misma Suprema Corte como el principio pro persona.

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución General debe entenderse en armonía con el diverso 133, en el que se instituye que la norma fundamental, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado de la República, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En consecuencia, **se puede afirmar que el derecho de las personas con discapacidad a presentarse como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, forma parte del catálogo de derechos humanos que las autoridades del Estado Mexicano deben garantizar, independientemente de su fuente internacional, y que forma parte del orden jurídico constitucional.**

De igual forma, el artículo 1º de la Constitución General establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Finalmente, este dispositivo legal señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El principio de igualdad contenido en los artículos 1º y 4º de la Carta Magna contiene dos cláusulas a saber: aquella que prohíbe los tratos arbitrarios y la que comprende la prohibición de discriminación. Ambas cláusulas son abiertas, pues no se limitan a un listado específico de categorías de protección, sino que garantizan la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana y prohíben la discriminación por cualquier motivo más allá de los literalmente enumerados. También son autónomas, porque no restringen el ejercicio a la amenaza de algún otro derecho establecido en la propia Constitución, sino que la igualdad está garantizada por sí misma.

Es importante considerar que el principio de igualdad va más allá de la igualdad ante la ley, ya que se debe asegurar la igualdad sustantiva; esto es, la igualdad de trato y de oportunidades para las personas en el ejercicio pleno de sus derechos, reconociendo las diferencias existentes de una manera que no se ejerza algún tipo de discriminación.

Los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución General deben impregnar a todas las instituciones del país, desde el diseño de las políticas públicas de trato preferente, la creación normativa y el actuar de las instancias públicas con base en la igualdad estructural e implica una reformulación y reorganización del Estado y la sociedad. En ese sentido, cabe aclarar que, si bien algunos de los instrumentos normativos internacionales que más adelante se mencionan, hasta la fecha no son vinculatorios para el Estado Mexicano, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos eleva el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de todas las personas a rango constitucional.

Por su parte los artículos 2, fracción XXVII de la Ley General para la Inclusión; 1, párrafo segundo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indican que se **entenderá por persona con discapacidad**: *"...A toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás..."*.

Así mismo, los artículos 2, fracción XIV de la Ley General para la Inclusión; y 2 de la Convención, refieren que **se entenderá por discriminación por motivos de discapacidad**: *"...A cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables..."*.

Así mismo, el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión, menciona que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

De igual forma, indica que las acciones afirmativas positivas deberán consistir en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

Además, dicho artículo refiere que la administración pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la administración pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en áreas rurales, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

En tal sentido, la Sala Superior ha señalado que todas las autoridades del Estado se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad; sirve de apoyo la Tesis XXVIII/2018 siguiente:

"...PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO CON EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 5, 13, y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", todas las autoridades del Estado se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad. En términos de lo

expuesto, las autoridades jurisdiccionales electorales, deben asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad desde una perspectiva que observe el llamado "modelo social de discapacidad", con base en el cual se asume que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son generadas por la falta de servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, en la mayor medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía; tales como, la asignación de un asesor jurídico, el acondicionamiento estructural de espacios físicos, el acompañamiento de personas de confianza durante el desarrollo del proceso y la emisión de las resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva esa finalidad.

Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió en la Tesis I.3º. C.110 K (10º.) de rubro:

"...PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZARLES LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LES ASEGUREN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, ATENTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; y prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por tener cualquier tipo de discapacidad. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé en sus artículos 5, fracciones V y VI, y del 28 al 31, el reconocimiento a la autonomía individual que incluye la libertad para poder tomar sus propias decisiones y la independencia de que gozan aquéllas para ejercer su voluntad, quienes tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte. En ese sentido, el deber del Estado es procurar los medios y condiciones jurídicas en general, para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. En especial, el Estado está obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley..."

En tal virtud y de conformidad con la Ley General para la Inclusión, reglamentaria, en lo conducente, del artículo 1º de la Constitución General, el Estado Mexicano debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

En el artículo 2, fracción IX, de la Ley antes referida, **define a la "Discapacidad"** como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

En el artículo 2 de la misma Ley, en sus fracciones X a XIII, se relacionan con los tipos de discapacidades siendo estas la:

- **Física:** Como la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
- **Mental:** La define como la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
- **Intelectual:** Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
- **Sensorial:** Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Respecto a la "Igualdad de Oportunidades", en la fracción XX, del artículo 2, de la Ley General para la Inclusión, se establece que es el proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población.

Por su parte, en el artículo 4 de la Ley en mención, se establece que las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte, a través de su Primera Sala, estableció en la Tesis aislada V/2013²⁰, que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha desarrollado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre las personas. Así, las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte, en la Tesis aislada VI²¹/2013, señaló que la concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración.

Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, las cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar que atenúan las desigualdades.

Igualmente, la citada Sala del Máximo Tribunal, en la Tesis aislada VIII/2013²², estableció que, del análisis jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad, debe guiarse

20 Décima Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1; Materia Constitucional; página 630, de rubro: DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN.

21 Décima Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1; Materia Constitucional; página: 634, de rubro: DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

22 Décima Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1; Materia Constitucional; página 635, de rubro: DISCAPACIDAD. VALORES INSTRUMENTALES Y FINALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN ESTA MATERIA.

a través de diversos principios y directrices que rigen en la misma, los cuales se constituyen tanto por valores instrumentales, así como por valores finales.

En primer término, los valores instrumentales en materia de discapacidad, consisten en las medidas que en tal ámbito deben ser implementadas, siendo el nexo entre los presupuestos de la materia y los valores finales que se pretenden alcanzar, y pueden ser clasificados de la siguiente manera: **(i)** medidas de naturaleza negativa, relativas a disposiciones que vedan la posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad por la sola presencia de una diversidad funcional; y **(ii)** medidas de naturaleza positiva, consistentes en elementos diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las personas que poseen alguna diversidad funcional con el resto de la sociedad, también conocidas como ajustes razonables.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte, señaló que los valores finales fungen como ejes rectores de la materia de la discapacidad, constituyendo estados ideales a los cuales se encuentran dirigidos los valores instrumentales de dicho ámbito. Tales metas son las siguientes: **(i)** no discriminación, entendiendo por ésta la plena inclusión de las personas con discapacidad en el entorno social; e **(ii)** igualdad, consistente en contar con las posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en aras de alcanzar un estado de bienestar físico, emocional y material.

Ahora bien, de conformidad con el **contexto de la desigualdad histórica** de las personas con discapacidad y que justifica, no sólo el garantizar la protección de su derecho a emitir su voto, sino también el garantizar que **puedan presentarse efectivamente como candidatas y candidatos en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública.**

II. 8 Marco Normativo Local de Personas con Discapacidad

En el ámbito local, el artículo 4, la Ley para las Personas con Discapacidad en el estado de Baja California, dispone que: "... las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos inherentes al ser humano, así como los establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de discapacidad.

Así mismo en su numeral 3, del dispositivo legal antes referido, **define a la Discapacidad,** como "...toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad para

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano en función de su edad, sexo, o factores sociales y culturales..."

De igual modo en sus fracciones V a IX, se relacionan con los tipos de discapacidades, definiéndolas tal como a continuación se precisan:

- **Auditiva:** A la originada por una deficiencia sensorial congénita o adquirida, caracterizada por la pérdida severa de la capacidad de percepción de las formas acústicas, producida ya sea por una alteración del órgano de la audición o bien de la vía auditiva, y que por la carencia de la agudeza auditiva se limita o impide la comunicación oral;
- **Mental:** A la presencia de un desarrollo mental detenido o incompleto, derivado de lesiones o deficiencias en los procesos cerebrales, adquiridos de forma prenatal, perinatal, natal o posnatal, que afectan a nivel global la inteligencia, las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización, incluidos los trastornos del neurodesarrollo;
- **Motriz:** Al conjunto de alteraciones y deficiencias congénitas o adquiridas, que, en distintos grados, afectan la ejecución y control de movimientos, la postura del cuerpo y la motricidad en general de la persona, independientemente de la causa o hecho desencadenante;
- **Múltiple:** A la presencia de dos o más discapacidades en una persona;
- **Visual:** A la derivada de una deficiencia sensorial del sentido de la vista, que se caracteriza por la carencia o disminución de la agudeza o campo visual, cuando esto represente una barrera insuperable, la cual impacte o restrinja la capacidad para realizar una actividad o función necesaria dentro del rol normal de la persona.

II.9 Marco Normativo Internacional y Nacional para las Juventudes

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes²³, como parámetro de derecho comparado, establece que las juventudes tienen derecho a la participación política, por lo que compromete a los Estados Parte a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva su participación en todos

²³ La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Este instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas. La primera de ellas, remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto internacional, que se viene insertando en el concierto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que insta a los Estados de la región a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. La segunda, por su parte, enfatiza al carácter práctico del instrumento, en tanto permite el conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus derechos por parte de las personas jóvenes.

los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión y a promover medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de las juventudes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.²⁴

La Sala Superior, en diversos precedentes ha establecido que en materia electoral se ha implementado la técnica de las cuotas de candidaturas a grupos que, se presume, han sido objeto de discriminación con anterioridad (jóvenes, indígenas, mujeres, personas con alguna discapacidad etc.) con el fin de facilitar el acceso de individuos de dichos grupos a la posibilidad de ejercer, en forma efectiva, su derecho a ser votados.²⁵

Ha señalado que de conformidad con los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución General, corresponde a las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de carácter político electoral, lo que se traduce en el establecimiento de determinadas obligaciones a los partidos políticos, para incentivar la participación de las juventudes en la vida democrática del Estado.²⁶

A su vez, que resulta de la mayor relevancia que se establezcan medidas e impulsen así acciones que sean incluyentes de las personas jóvenes a fin de que los órganos del Estado y las decisiones públicas se nutran de la visión, conocimientos, inquietudes y preocupaciones de las nuevas generaciones y se les haga partícipes de decisiones gubernamentales que afectarán su vida adulta y la de su generación.

La Sala Superior, ha determinado que el concepto de juventud como categoría social específica, invoca el reconocimiento de un sector de la población con características propias, así como que las juventudes no deben concebirse como un concepto o condición social, sino que las personas jóvenes son actores sociales dotados de una identidad propia en los espacios de opinión, y por tanto poseen una amplia visión sobre la vida y su entorno, siendo su participación determinante en la vida colectiva de toda sociedad y ha sostenido que resulta de mayor relevancia que se establezcan medidas y se impulsen acciones que sean incluyentes de las juventudes a fin de que los órganos de los Estados y las decisiones públicas se nutran de la visión, conocimientos, inquietudes y preocupaciones de las nuevas generaciones y se les haga partícipes de decisiones gubernamentales que afectarán su vida adulta y la de su generación.²⁷

Que como se ha referido en el apartado del marco legal normativo del presente Dictamen, las acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y

²⁴ Artículo 21.

²⁵ SUP-JRC-96/2008. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en: <https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JRC/SUP-JRC-00096-2008.htm>

²⁶ SUP-RAP-71/2016 y Acumulados. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/71/SUP_2016_RAP_71-551218.pdf

²⁷ Ibid. p. 199

convencional de igualdad material, tomando en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y de sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, entre otros. Constituyen una medida compensatoria para situaciones de desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a las oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales.

Es por lo anterior que, si la participación de las personas jóvenes en la vida política no se da de manera natural, es entonces que se debe de garantizar por la ley o por la autoridad administrativa, al igual que la moción de ley que garantizó la participación de las mujeres en la política a través de cuotas, avanzar en la reglamentación de la participación garantizada de las juventudes en la política, es avanzar en democracia.

Si bien, no existe una definición universalmente aceptada de cuáles edades comprenden las juventudes, se debe observar la esperanza de vida y las transiciones a la adultez para establecer los rangos de edad que abarcan las juventudes. En 1950 en nuestro país la esperanza de vida era de 47.34 años y en la actualidad es de 75.35 años, es decir, una diferencia de 28.01 años de vida. El primer reconocimiento de un rango de edad de las juventudes viene de 1985, año internacional de las juventudes organizado por la ONU. La definición abarcaba de los 15 a los 24 años. En ese año la esperanza de vida en México alcanzaba los 69.02 que, comparado con el dato de 2021, tenemos que la diferencia es de 6.33 años.

Los años siguientes al año internacional de las juventudes (1985) y del reconocimiento de una definición que abarcara un rango de edad, vinieron modificaciones que dependiendo los países fueron adoptando y oscilando los rangos considerados de juventudes entre los 12 y 29 años en México (Ley del Instituto Mexicano de la Juventud)²⁸ y por su parte dicho rango de edad es replicado por la Ley de la Juventud para el Estado de Baja California, pues establece que las personas jóvenes son personas sujetas de derecho, cuya edad comprende entre los 12 y los 29 años cumplidos.

"Artículo 2. Son sujetos de aplicación de la presente Ley, todas las personas que se encuentren comprendidas entre los 12 a los 29 años de edad en el Estado, y sus normas se les aplicarán, de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, étnica, con la finalidad de contribuir a su desarrollo integral, mediante su inclusión social plena al proceso del desarrollo estatal."

²⁸ Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

"Artículo 4, fracción X, establece que se entenderá por Jóvenes a las personas cuya edad comprenden el rango entre los 12 y los 29 años de edad."

La Constitución Local en sus artículos 17 y 80 establece como requisito para ejercer el cargo en una diputación o ser miembro de un ayuntamiento del Estado, el tener 18 años cumplidos con la salvedad del cargo a presidente municipal que establece como edad mínima 25 años cumplidos el día de la elección.

El Tribunal Local, al dictar la sentencia que hoy se atiende, referente al Recurso de Inconformidad RI-47/2020 y acumulados precisó que:

"Por tanto y toda vez que el Consejo General no fundó ni motivo debidamente la emisión de la acción afirmativa materia de análisis, lo procedente es dejar sin efecto el artículo 23 de los Lineamientos que la contiene, para que implemente una nueva medida a favor de los jóvenes, en diputaciones y municipios, considerando para ello que la edad es de los dieciocho (18) a los veintinueve años (29), con las salvedades de ley."

Por tanto, y atendiendo a la obligación de promover las condiciones para que las personas jóvenes tengan oportunidades reales para ingresar a la vida política del país, sin ser discriminados por su edad, mediante el establecimiento de acciones afirmativas que permitan acelerar la inclusión de la población comprendida, esta Autoridad Electoral es que considera establecer acciones afirmativas a favor de la población joven comprendida en el rango de edad entre los 18 y 29 años, con la intención de garantizar su participación en el ámbito público de toma de decisiones y que sea eliminada la discriminación que históricamente han sufrido las juventudes.

Ahora bien, el artículo 1º de la Constitución General determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la norma suprema y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que queda prohibida toda discriminación por razones de género o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

III. DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE RI-47/2020

Que tal como ha quedado de manifiesto en el Antecedentes número 2 del presente Dictamen, el Tribunal Electoral emitió Sentencia Definitiva, dejando sin efectos los artículos 20, 23 y 30 de los Lineamientos, la cual estableció que se debería analizar la factibilidad de generar acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas,

diversidad sexual, personas con discapacidad, y de Jóvenes, debiendo emitir un nuevo acuerdo, en cuyos efectos estableció lo siguiente:

"...9. EFECTOS

Al resultar fundados los agravios por lo que hace a las acciones afirmativas sobre las comunidades indígenas y jóvenes, lo procedente es dejar sin efectos los artículos 20, 23 y 30 de los Lineamientos, **para que la responsable emita un nuevo acuerdo**, en el cual analice la factibilidad de generar acciones afirmativas a favor de las Comunidades Indígenas y Jóvenes.

Así mismo y toda vez que omitió implementar medidas positivas en favor de la comunidad LGBTI+, igualmente analizará la factibilidad de emitir acciones afirmativas a su favor.

Por otra parte, y toda vez que este Tribunal advierte que las personas con discapacidad también pertenecen a un grupo históricamente desventajado, el Consejo General, analizará la viabilidad de implementar las medidas que procedan.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Consejo General, sin demento de otras acciones que considere necesarias deberá atender lo siguiente:

COMUNIDADES INDÍGENAS

1. Esta medida se tomará para aplicarse, en el presente Proceso Electoral Local 2021-2022, por lo que la responsable contará con un plazo no mayor a 30 días para ello debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que esto ocurra;

2. Para la emisión de la acción afirmativa, deberán considerarse los parámetros establecidos por la Sala Superior, en el SUP-REC-28/2019 referidos en esta Sentencia en el punto 8.2.;

3. Se atenderá al impacto que representa, el criterio de gradualidad previsto en el artículo 26, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones;

4. Para determinar fórmulas indígenas de municipios a los Ayuntamientos y Diputaciones indígenas de mayoría relativa, se considerará el impacto que presenta en la población Indígena, la creación de San Quintín como nuevo municipio en la entidad, motivo por el cual, la responsable deberá de allegarse de documentos idóneos que le permitan tomar la medida compensatoria;

5. En lo tocante a la representación política en el Congreso del Estado, se deberá considerar la población Indígena de cada uno de los Distritos Electorales en que se divide la entidad- diecisiete distritos (17), a fin de determinar "Distritos Indígenas".

COMUNIDADES LGBTI+ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Se determinará la población que integra cada uno de estos grupos vulnerables;
2. Se establecerá su participación histórica en los grupos de Municipios y Diputaciones, para determinar la subrepresentación.

Al efecto, corresponderá al Instituto Electoral analizar y determinar sobre la viabilidad de la medida y en su caso, su implementación para el proceso Electoral Local 2020-2021, o bien, hasta el Proceso 2024-2027.

JUVENTUDES

1. Esta medida se tomará para aplicarse, en el presente Proceso Electoral Local 2020-2021, por lo que la responsable contará con un plazo no mayor a treinta días para ello, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que esto ocurra;
2. Se determinará la población que integra cada uno de estos grupos vulnerables de acuerdo a los parámetros nacionales y estatales;
3. Se establecerá su participación histórica político electoral en los cargos de Municipios y Diputaciones, para determinar la subrepresentación (postulación de candidatos por los distintos partidos políticos e independientes, integración del Congreso y Ayuntamientos);
4. Deberá revisar el padrón electoral y listado nominal del INE sobre la distribución de ciudadanos por grupos de edad de la entidad, a nivel Municipal y Distrital a efecto de tener referencia de la concentración de este sector.

Se dejan intocados los acuerdos que no fueron materia de impugnación.

Por otra parte, deberá vincularse al Congreso del Estado para que lleve a cabo las medidas que procedan, a fin de garantizar el acceso a la representación política de las personas en situación de vulnerabilidad, como las que aquí se mencionan.

Finalmente y toda vez que Juan Antonio Mayagoitia Galicia, quien en su carácter de Amigo del Tribunal, solicita que en vía denuncia, se dé vista a la Fiscalía Especializada en Materia Electoral y al INE, por conducto de la Unidad de Vinculación con los Organismos Electorales Locales, para que inicie una investigación y deslinde responsabilidades, inclusive se separen del cargo a los Consejeros Electorales que emitieron el acto impugnado, este Tribunal deja a salvo sus derechos para que se así lo desea, presente su denuncia directamente ante las autoridades correspondientes..."

[...]

III.1 Del Incidente de aclaración de sentencia

Que tal como ha quedado asentado en el antecedente 3 del presente Dictamen, esta autoridad electoral promovió por la vía incidental la aclaración de sentencia, solicitando se aclare si el contenido del considerando 8.2 de la sentencia debe cumplirse en el sentido que las y los ciudadanos habitantes del municipio de San Quintín tendrán, o no, restringido su derecho al voto en la elección de munícipes de Ensenada en el presente Proceso Electoral Local 2020-2021, ya que consideran que por un lado, en la sentencia se ordena implementar acciones afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas asentadas en Ensenada, pero por otro lado, se restringe la participación de esos pueblos asentados en el nuevo municipio de San Quintín, para votar y ser votados en las elecciones de munícipes de Ensenada.

Que como ha quedado de manifiesto en el antecedente 8 del presente instrumento, esta autoridad electoral le fue notificada de la Sentencia Interlocutoria, emitida por el Tribunal Electoral, en cuya resolución determino lo siguiente:

[...]

Al efecto, se estimó por este Tribunal que la "Representación política de las comunidades indígenas en munícipes", a que arribó el Consejo General, no corresponde a la realidad poblacional y política que actualmente impera en la entidad, ya que en nuestro Estado, actualmente se cuenta con un nuevo municipio, como es San Quintín, cuya demarcación territorial y poblacional correspondía al de Ensenada, circunstancia que pasó por alto el Consejo General, al momento de determinar la población indígena en cada uno de los municipios que conforma el Estado, pues con la creación del nuevo municipio, Ensenada se ve disminuida en cuanto a su población en general y, por ende, en lo que toca a comunidades y pueblos indígenas, lo cual genera un impacto en los resultados que se deberán tomar como base para establecer el acceso de las comunidades indígenas a la representación política; amén que debió considerar, que aun cuando se cuenta con el nuevo municipio, para este proceso electoral local 2020-2021, no se elegirán munícipes por lo que hace a San Quintín, sin embargo los residentes de este nuevo municipio, si participarán en la elección de gobernador y diputados del congreso del estado en la elección ordinaria 2021.

Como se puede observar, tanto de las consideraciones en que se sustentó la sentencia como sus efectos, este Tribunal hizo énfasis en que el Consejo General no tomó en cuenta que actualmente en la Entidad existe un nuevo municipio como es San Quintín, situación que a juicio de este órgano jurisdiccional debió considerarse para emitir las medidas que resultaran idóneas al implementar las acciones afirmativas indígenas, tratándose de munícipes; sin embargo, en momento alguno este Tribunal decidió sobre el derecho político electoral de votar y ser votado de las ciudadanas y los

ciudadanos habitantes del referido municipio, por el contrario, lo que se resolvió fue que el Instituto Electoral, al establecer las acciones afirmativas debió considerar el impacto que representa la creación de San Quintín como municipio, para establecer el acceso de las comunidades indígenas a la representación política, y también debió considerar, que para este Proceso Electoral Local 2020-2021, no se elegirán munícipes por lo que hace a San Quintín, pero contrario a ello, en el Dictamen número siete en que se implementaron las acciones afirmativas que nos ocupan, fue omiso en pronunciarse al respecto, **por lo que se desconoce la situación real de la Entidad y el impacto que, en su caso, esto acarrea**, motivo por el cual se ordenó realizar diversos actos, de lo que resultará como se implementarán esas acciones afirmativas.

Por ello, ante la omisión del Instituto Electoral de realizar un estudio base en la nueva conformación del Estado, este Tribunal le ordenó allegarse de documentos idóneos que le permitan tomar la medida compensatoria que corresponda, tratándose de las fórmulas indígenas de munícipes a los ayuntamientos y diputaciones indígenas de mayoría relativa, tal y como se observa del efecto identificado con el número 4, de la sentencia, del que conjuntamente con los demás efectos, se puede advertir que el Instituto Electoral debe realizar una serie de actos, y **tomar en consideración diversos supuestos**, entre ellos, los parámetros establecidos por Sala Superior, en el expediente SUP-REC-28/2019, con la finalidad de conocer como impactan los cambios que aquí se exponen, pues ello se sabrá a la luz de los trabajos realizados por el propio Instituto Electoral.

Por tanto, es el Instituto Electoral quien, una vez que recabe la documentación que se requiere y lleve a cabo las actividades correspondientes, determinará en qué situación se encuentra la Entidad para tomar las acciones afirmativas que correspondan, tal y como se determinó en el resolutivo CUARTO de la sentencia, en el que se le ordenó "analizar", y en su caso, implementar las acciones correspondientes.

[...]

Ahora bien, se advierte que el Instituto Electoral refiere que el Congreso del Estado, al emitir el Decreto cuarenta y seis, no estableció determinación alguna respecto al ejercicio del voto activo y pasivo, por parte de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el municipio de San Quintín, por lo que respecta a las elecciones de dos mil veintiuno, y que el INE indicó que no existe un marco geográfico electoral actualizado derivado de la creación del multicitado municipio, por lo que se desconoce que secciones electorales que integran la geografía electoral en Baja California resultaron afectadas por la segregación territorial y poblacional únicamente en lo que respecta a la demarcación municipal; en esa tesitura, este Tribunal considera oportuno que el Instituto Electoral, en su carácter de organismo público electoral,

encargado de organizar las elecciones, y atendiendo a las indicaciones señaladas en la sentencia de mérito, consulte de nueva cuenta a dichas autoridades para que, una vez expuesta la situación que nos ocupa, le indiquen lo que en su caso corresponda, considerando además, que es el INE la autoridad encargada de la función pública electoral de organizar las elecciones a nivel y quien se encarga, entre otras cosas, de mantener actualizada la cartografía electoral del País; sin que ello implique que sean las únicas autoridades a quienes puede solicitarles la información y documentación correspondiente..."

III.2 Consideraciones para el cumplimiento de sentencia

Que una vez que se ha definido que son las acciones afirmativas y su importancia en el Sistema Electoral Mexicano, y la obligación de las autoridades electorales de remover todos los obstáculos que impidan hacer efectivo el principio de igualdad material y por tanto, la paridad entre los géneros, es necesario que las medidas compensatorias ordenadas por la autoridad jurisdiccional en la **Sentencia RI-47/2020**, sean analizadas y justificadas para cada situación concreta, por lo que a continuación se establecen todas ellas:

- **PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS**

Respecto a las acciones afirmativas implementadas, para comunidades indígenas, la autoridad jurisdiccional señaló que estas no se implementaron a partir de un parámetro objetivo y razonable, esto es, que no superan un juicio de proporcionalidad, establecido en los artículos 20 y 30 de los Lineamientos, transgrediendo con ello los principios de seguridad jurídica y certeza;

- **COMUNIDADES LGBTTIQ+**

En ese mismo sentido, el Tribunal señaló que en el Dictamen no se observaron consideraciones enderezadas a justificar porque las personas pertenecientes a los grupos LGBTTIQ+ no gozan de una medida compensatoria para revertir la desigualdad de la que han sido objeto; y tampoco se vierte argumentos de los que se desprenda que dichas personas quedan incluidas en los "Otros grupos de situación de desventaja", a que se refiere el artículo 24 de los Lineamientos, lo cual que se tradujo en un violación a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.

Asimismo, se señaló la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía a ser votada, consagrada en el artículo 35, fracción II, de la Constitución General, y los principios de igualdad y no discriminación. Además de la falta de motivación y fundamentación que justificara dicha omisión, trasgrediendo el principio de legalidad.

- **PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Del mismo modo las personas con discapacidad, que en alto grado de discriminación será necesario que esta autoridad electoral, implemente acciones afirmativas, que hagan posible el acceso de estas personas a la representación política, y dado que también se encuentran amparadas constitucionalmente y convencionalmente.

Por lo que se deberá desplegar una serie de actos a fin de determinar la población estatal, municipal y distrital de personas con discapacidad; la participación histórica de este grupo en los cargos municipales, diputaciones y sub representación entre otros. Debiendo determinar la viabilidad de que la medida se implementada para el proceso electoral local 2020-2021 o bien, hasta el proceso 2024-2027.

- **JUVENTUDES**

En este caso el Tribunal Electoral, estimo que la acción afirmativa, carecía de fundamentación y motivación, en razón de que fue omisa al expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica aplicable a nivel Estatal.

Ahora bien, esta autoridad electoral puede en ejercicio de sus atribuciones implementar medidas o modalidades que los partidos políticos deberán observar en sus procedimientos internos, siempre que con ello se impulse el derecho desde una óptica de progresividad hacia el establecimiento de cuotas en materia de participación política de las comunidades Indígenas, población LGTBTTIQ+, personas con discapacidad y de las Juventudes, a fin de revertir la desigualdad condiciones históricas de desventaja en su participación política en la entidad, lo que abona a la construcción de una democracia más igualitaria.

Las mismas, se emiten para dar cumplimiento a la Sentencia²⁹ y con la finalidad de que los actores políticos conozcan las reglas a que estarán sujetos, considerando que como lo ha determinado la autoridad jurisdiccional, las acciones afirmativas deben implementarse preferentemente antes del inicio del proceso electoral, o cuando menos, durante la etapa de preparación de la elección, para garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica.³⁰

Motivo por el cual, se establecen las reglas que se deberán observar para garantizar la postulación, registro y designación de cargos de elección popular, de conformidad con

²⁹ RI-47/2020 y acumulados.

³⁰ SUP-REC-1557/2018 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultable en: https://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1557-2018.pdf

las etapas de selección de precandidaturas, postulación de candidaturas, registro, sustitución, en su caso, e integración de órganos de elección popular.

Que con los fundamentos jurídicos referidos previamente son reveladores de que el Instituto Electoral tiene el deber jurídico de maximizar y hacer efectivo derecho fundamental a la igualdad jurídica.

Al respecto, es pertinente dejar de manifiesto que el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, protege tanto a personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las discriminaciones estructurales que operan en contra de aquéllos, con el objeto de que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra índole que les impidan gozar a plenitud del resto de derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor.

Sobre este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 125/2017 y 1a./J. 126/2017, de rubros: **"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO"** y **"DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES"**, estableció que cuando existen discriminaciones estructurales, es obligación de las autoridades del Estado mexicano realizar todos los actos jurídicos necesarios que se encuentren en su esfera de competencias para eliminarlas, puesto que, de lo contrario, se genera una condición omisiva que deja de lado la faceta sustantiva del derecho a la igualdad, siendo esta dimensión la que permite revertir mediante acciones y medidas necesarias, las desigualdades fácticas existentes entre los distintos grupos de la sociedad, a efecto de que todos gocen de manera real y efectiva del resto de derechos humanos en condiciones de paridad con los otros conjuntos de personas o grupos sociales.

Dichas medidas son conocidas como acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material, como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables.³¹

³¹ Jurisprudencia 43/2014. **ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.** Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 y 13. Consultable en: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=43/2014>

Las mismas constituyen una medida compensatoria para situaciones de desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales, teniendo como características las siguientes:

- **Temporales:** Constituyen una medida cuya duración se encuentra encaminada al fin que se proponen.
- **Proporcionales:** Al exigírselas un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se reproduzca mayor desigualdad a la que pretende eliminar.
- **Razonables y objetivas:** Deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia en un sector determinado.³²

En ese sentido, como lo señaló la Sala Superior, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas, son:

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria.³³

A su vez, la Sala Superior en la referida Jurisprudencia 11/2015³⁴ consideró que la elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr, la figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.

³² Jurisprudencia 30/2014. **ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE SU IMPLEMENTACIÓN.** Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 11 y 12. Consultable en: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tipoBusqueda=S&sWord=30/2014>

³³ Jurisprudencia 11/2015. **ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.** Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15. Consultable en: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tipoBusqueda=S&sWord=ACCIONES.AFIRMATIVAS>

³⁴ Idem.

IV. Acciones Afirmativas a favor de Pueblos y Comunidades Indígenas

Que como ya se refirió, esta autoridad electoral llevara a cabo el análisis sobre la procedencia para la implementación de medidas afirmativas, a favor de Pueblos y Comunidades Indígenas, tal como a continuación se precisa:

IV.1 Criterios para determinar las acciones afirmativas de las Personas Indígenas

Para llevar a cabo el análisis para determinar la implementación de acciones afirmativas en la postulación de personas indígenas a candidaturas a cargos de elección popular de Municipios y Diputaciones, la Sala Superior en el Expediente SUP-REC-28/2019, apuntó que más allá de considerar el porcentaje poblacional que representen los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Baja California, las autoridades, al evaluar la implementación de acciones que permitan la representación y participación efectiva en la vida política de tales grupos en situación de vulnerabilidad, no pueden atender a dicho parámetro como el único a tomar en consideración, señalando que se deben tomar en cuenta las circunstancias de la entidad federativa, tales como:

a) El número de integrantes que corresponden a los órganos legislativos y municipales materia de la elección.

Este dato permite analizar el impacto que tendría la implementación de una acción afirmativa en los órganos donde se verían integrados.

Es de referir que, en el estado de Baja California, los cargos de elección popular que se encuentran sujetos a renovación en los Procesos Electorales y que integran los órganos de gobierno estatal y municipal son los siguientes:

TABLA 1 CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			
GUBERNATURA	CONGRESO DEL ESTADO	MUNICIPIOS	
1	25 Diputaciones 17 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de	Mexicali 17 Municipios	10 municipios en planilla de mayoría relativa
			7 municipios por el principio de representación proporcional
		Tijuana	10 municipios en planilla de mayoría relativa

**Comisión de Igualdad Sustantiva y
No Discriminación**

	representación proporcional	17 Municipios	7 municipios por el principio de representación proporcional
		Ensenada 15 Municipios	9 municipios en planilla de mayoría relativa
			6 municipios por el principio de representación proporcional
		Tecate 12 Municipios	7 municipios en planilla de mayoría relativa
			5 municipios por el principio de representación proporcional
		Playas de Rosarito 12 Municipios	7 municipios en planilla de mayoría relativa
			5 municipios por el principio de representación proporcional
1 Gobernatura	25 Diputaciones	5 Presidentes Municipales, 5 Sindicaturas y 63 Regidurías	

b) La proporción total de población indígena respecto al total de población estatal.

Dado que es un dato relevante para analizar la viabilidad de la implementación de una acción afirmativa a nivel estatal.

Del criterio Etnolingüístico y de Autoadscripción.

De conformidad con la información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (6), en el estado coexisten comunidades de pueblos indígenas originarios: **Kiliwas** con un total de 129 personas indígenas, **Kumiais** con 1181 sujetos, **Pai Pai** con 468 personas, **Cucapás** con 476 y **Cochimí** sin hablantes registrados(†)7, que en su conjunto suman un total de 2,254 personas, las cuales representan un 2.17% de la población indígena en la entidad; así como también población indígena asentada que es originaria de diferentes partes del país, sumando un total de 283,055 personas indígenas por criterio de autoadscripción, que representa el 8.5% del total de la población estatal y 104,088 hablantes de alguna lengua indígena.

Del total de 104,088 personas hablantes de alguna de las 38 agrupaciones lingüísticas, las cinco más predominantes en el estado de Baja California son el **Mixteco** con 40,355 personas; **Zapoteco** con 13,941 personas; **Náhuatl** con un total de 7,857 personas; **Tarasco** con 6,520 personas, **Triqui** con 4,136 personas y las demás (96,187 personas) se encuentran dentro del universo de las otras 33 agrupaciones lingüísticas restantes.

Por otra parte, conforme al **XIII Censo General de Población 2010**, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California habitan **3,155,070**. Para determinar la población indígena, el INEGI determinó 2 criterios: **Primero**, un criterio basado en la etnolingüística (personas que hablan alguna lengua indígena);

Segundo, un criterio basado en la población indígena habitante en hogares censados. Los resultados que nos aporta bajo los dos criterios descritos son: **2.71% de habitantes (85,643)** son población en hogares censales indígenas, de los cuales el **1.44% son mayores de 3 años y hablan alguna lengua indígena**.

Tabla 2. Población total y su distribución según hablantes de lengua indígena y población indígena en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Municipio	Población municipal	Población municipal de 3 años o más	Personas de 3 años o más, hablantes de alguna lengua indígena		Población indígena	
			Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo
Ensenada	466814	428553	23762	5.54%	46411	9.94%
Mexicali	936826	863858	4036	0.47%	8451	0.90%
Tecate	101079	92883	817	0.88%	1973	1.95%
Tijuana	1559683	1428592	12124	0.85%	26444	1.70%
Playas de Rosarito	90668	83579	997	1.19%	2364	2.61%
Total	3155070	2897465	41736	1.44%	85643	2.71%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 2011

Sin embargo, al observar lo establecido en el artículo 2º de la Constitución General para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, además de los dos criterios utilizados por INEGI en 2010, se reconoce que la **conciencia de la identidad indígena es criterio fundamental** para determinar a quienes se aplican las disposiciones para pueblos indígenas, para lo que INEGI adopta el criterio de conciencia de identidad (conocido también como *autoadscripción o autoreconocimiento*) en la Encuesta Intercensal 2015, los resultados en cuanto a personas, la población que se autoadscribe indígena en Baja California es el **8.54% (283,166)** de la población indígena.

Tabla 3. Población total y su distribución según autoadscripción indígena y hablantes de lengua indígena en Baja California, Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Municipio	Población municipal	Población municipal de 3 años o más	Personas de 3 años o más, hablantes de alguna lengua indígena		Autoadscripción indígena	
			Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo
Ensenada	486639	462140	23523	5.09%	87790	18.04%
Mexicali	988417	941669	5933	0.63%	45961	4.65%
Tecate	102406	97355	974	1.00%	12811	12.51%
Tijuana	1641570	1559361	13878	0.89%	126565	7.71%
Playas de Rosarito	96734	91779	1496	1.63%	9867	10.20%
Total	3315766	3152304	45804	1.45%	282994	8.53%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 2016.

Sin embargo, en el apartado de **"Efectos"** de la sentencia dictada por el Tribunal Local, en el Recurso de Inconformidad RI-47/2020 y acumulados, determinó:

5. En lo tocante a la representación política en el Congreso del Estado, se deberá considerar la población indígena de cada uno de los distritos electorales en que

se divide la entidad -diecisiete distritos (17), a fin de determinar "Distritos Indígenas"

Por lo anterior, para poder atender la indicación del Tribunal Local y determinar los "Distritos Indígenas" no es posible contemplar el criterio de conciencia de identidad (conocido también como autoadscripción o autoreconocimiento) debido a que, no es posible desagregar la Encuesta Intercensal 2015 a nivel geoelectoral pues como se estableció en los antecedentes el INEGI al atender la solicitud de información presentada por este Instituto, señaló que no se contaba con dicha información.

Al obtener los datos a nivel geo electoral del criterio basado en la etnolingüística y del criterio basado en la población indígena habitante en hogares censados se obtuvieron los siguientes resultados:

Población total y su distribución según hablantes de lengua indígena y población indígena, a nivel Distrital, en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

DISTRITO	POBLACIÓN	HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA	%	POBLACIÓN INDÍGENA	%
I	146,777	748	0.51	1,732	1.18
II	176,920	562	0.32	1,128	0.64
III	187,474	721	0.38	1,299	0.69
IV	181,282	671	0.37	1,361	0.75
V	244,370	1,334	0.55	2,931	1.20
VI	182,656	1,477	0.81	3,742	2.05
VII	184,391	2,198	1.19	4,059	2.20
VIII	184,039	1,127	0.61	2,246	1.22
IX	193,379	1,044	0.54	2,119	1.10
X	183,897	1,619	0.88	3,345	1.82
XI	187,447	1,325	0.71	2,939	1.57
XII	150,007	1,539	1.03	3,783	2.52
XIII	211,012	1,579	0.74	3,816	1.81
XIV	184,147	1,035	0.56	2,384	1.29
XV	204,567	3,048	1.49	6,273	3.07
XVI	179,010	1,296	0.72	2,697	1.51
XVII	173,695	20,408	11.75	39,789	22.91
TOTAL	3,155,070	41,731	1.32	85,643	2.71

En donde se puede identificar que el Distrito XVII, es el que concentra la mayor densidad de población en todo el estado, tanto de personas que hablan una lengua indígena, como de población indígena, de acuerdo con los criterios establecidos por el INEGI.

Mientras que la información arrojada por Municipio es la siguiente:

Población total y su distribución según hablantes de lengua indígena y población indígena, a nivel Distrital en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

MUNICIPIO	POBLACIÓN	HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA	%	POBLACIÓN INDÍGENA	%
Ensenada	466,814	23,762	5.09	46,411	9.94 %
Mexicali	936,826	4,036	0.43	8,451	0.90 %
Tijuana	1'559,683	12,124	0.78	26,444	1.70 %
Tecate	101,079	817	0.81	1,973	1.95 %
Playas de Rosarito	90,668	997	1.10	2,364	2.61 %
TOTAL	3'155,070	41,736	1.32	85,643	2.71

c) La participación histórica de la ciudadanía indígena en los cargos en cuestión.

Permitirá visualizar las posibilidades reales que han tenido las comunidades y pueblos indígenas de acceder a cargos de elección popular por la vía partidaria.

Al respecto, resulta importante destacar que la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto, mediante oficio **CPPyF/037/2021** señaló que **no existe un registro formal que permita conocer la participación política indígena en la postulación** o integración de órganos de gobierno, ya que en los diversos formatos de registro de candidatura implementados en los procesos electorales locales, no existe la obligación de señalar la pertenencia a un grupo o comunidad indígena, ni así ha sido manifestado de manera voluntaria por los ciudadanos y ciudadanas participantes en los procesos electorales.

De ahí, que es importante revisar la representatividad de los cargos a elección popular para conocer la incidencia correspondiente de la población indígena en la integración de los órganos de gobierno que, si bien ya ha quedado de manifiesto que se cuenta con presencia indígena en todo el Estado, en el presente ejercicio, se toma directamente la proporción de presencia indígena a nivel estatal, así como la correspondiente a cada municipio con los cargos de elección popular respectivos.

Representación política de las Comunidades Indígenas en el Congreso del Estado

	Ensenada	Mexicali	Playas de Rosarito	Tecate	Tijuana	Total
Población total	486,639	988,417	96,734	102,406	1,641,570	3,315,766
Pob. Indígena	87,790	45,961	9,867	12,811	126,565	283,166
% Pob. Indígena	18.04 %	4.65 %	10.20 %	12.51%	7.71%	8.5%
Distritos Electorales	2.94	7.35	1.47	1.47	11.76	25
Proporción de representación	165,523	134,479	65,805	69,664	139,589	132,631
Diputaciones indígenas	0.530376	0.341775	0.14994	0.183897	0.906696	2.135

Fuente: Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2020.

Representación política de las Comunidades Indígenas en Municipios

	Ensenada	Mexicali	Playas de Rosarito	Tecate	Tijuana	Total
Población total	486,639	988,417	96,734	102,406	1,641,570	3,315,766
Pob. Indígena	87,790	45,961	9,867	12,811	126,565	283,166
No. de Regidores	13	15	10	10	15	
Proporción de Representación	37,434	65,894	9,673	10,241	109,438	
Regidores Indígenas	2.3452	0.6975	1.02	1.251	1.1565	

Fuente: Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2020.

d) La diversidad de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes.

A fin de conocer la diversidad de ideologías dentro de las comunidades indígenas de Baja California.

Si bien, las personas indígenas que actualmente radican en la entidad no solo provienen de pueblos y comunidades indígenas originarias, ello no impide acceder a la tutela del derecho como se establece en el artículo 7 apartado A, de la Constitución Local, que dispone en la parte conducente:

"...Esta Constitución asume a plenitud todos los derechos, prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas; así como las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Por tanto, reconoce los derechos colectivos, a los siguientes pueblos indígenas autóctonos: **Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, así como a las comunidades que conforman estos pueblos.**

Las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo indígena, procedentes de otro Estado de la República y que residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado de Baja California, quedan protegidos por los derechos señalados en esta Constitución y la ley respectiva. La conciencia de la identidad indígena será criterio fundamental para determinar a quienes aplican las disposiciones que sobre pueblos indígenas se establezcan en esta Constitución y Leyes de la materia...".

En consecuencia, las personas destinatarias de las acciones afirmativas son las comunidades indígenas de los pueblos: **Kiliwa, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, y aquellas comunidades y personas que pertenezcan a cualquier otro pueblo indígena, procedentes de otros Estados de la República y que residan dentro del territorio del Estado de Baja California.**

IV.2 Cumplimiento de Sentencia

Esta autoridad electoral, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia dictada al resolver el recurso de inconformidad RI-47/2020 y acumulados, en la que se ordenó:

"...Cuarto. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, que analice y, en su caso, implemente acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTI+, personas con discapacidad y jóvenes, en términos de la presente sentencia..."

Además, indicó lo siguiente:

4. Para determinar fórmulas indígenas de municipales a los ayuntamientos y diputaciones indígenas de mayoría relativa, se considerará el impacto que representa en la población indígena, la creación de San Quintín como nuevo municipio en la entidad, motivo por el cual, la responsable deberá de allegarse de documentos idóneos que le permitan tomar la medida compensatoria.

Como antecedente se deber considerar que el año inmediato anterior, el Congreso del Estado de Baja California, mediante el Decreto 46 estableció lo siguiente:

Único. La Honorable Vigésima Tercera (XXIII) Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el artículo 27 de la Ley de Régimen Municipal del estado de Baja California, aprueba la creación del municipio de San Quintín...

Asimismo, se hace mención de la superficie, circunscripción y colindancias que conformarán el nuevo municipio, sin embargo, aún no se cuenta con una cartografía electoral del nuevo municipio que nos permita definir las secciones electorales que lo integrarán, para a su vez, poder identificar las secciones que pertenecen a cada uno de los Distritos Electorales, y saber con exactitud la población indígena que los conforma.

Por lo anterior, y mediante oficio **IEEBC/CGE/244/2021** se solicita al INE, que nos proporcione la siguiente información:

[...]

"CONSULTA:

Así pues, la consulta es si derivado de la creación del Municipio de San Quintín, Baja California, el Instituto Nacional Electoral ha realizado trabajos de reseccionamiento en los límites territoriales entre el referido municipio y Ensenada.

En caso afirmativo, consultar si el estado actual de los trabajos de reseccionamiento permiten su aplicación en el actual proceso electoral concurrente 2020-2021 en Baja California, o bien, en el supuesto de que no hayan concluido hasta el momento, considerando las atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral en materia de cartografía electoral ¿Qué secciones electorales se deben de utilizar para la elección de munícipes de Ensenada?..."

[...]

Por otra parte, con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020, a nivel municipal, es posible identificar la población indígena que reside en el municipio de San Quintín:

Población total y su distribución según hablantes de lengua indígena y población indígena, a nivel municipal en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

MUNICIPIO	POBLACIÓN	HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA	%	POBLACIÓN INDÍGENA	%
Ensenada	443,807	11,753	2.65	23,831	5.37
Mexicali	1'049,792	5,920	0.56	9,657	0.92
Tijuana	1'922,523	12,328	0.64	28,810	1.50
Tecate	108,440	690	0.64	1,596	1.47
Playas de Rosarito	126,890	1,189	0.94	2,856	2.25

San Quintín	117,568	17,520	14.90	35,863	30.50
TOTAL	3'769,020	49,400	1.31	102,613	2.72

Como se puede apreciar el porcentaje del criterio basado en la etnolingüística en dicho municipio es de 14.90% mientras que el de población indígena habitante en hogares censados es de 30.50%, con relación al resto de los municipios tiene los porcentajes más altos en ambos criterios, seguido por el municipio de Ensenada, el cual tiene un porcentaje de 2.65% y 5.37%, respectivamente.

Si comparamos los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 y 2020, se obtienen los siguientes resultados:

Comparativo de % según hablantes de lengua indígena y población indígena, a nivel municipal en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

MUNICIPIO	PORCENTAJE HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA 2010	PORCENTAJE POBLACIÓN INDÍGENA 2010	PORCENTAJE HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA 2020	PORCENTAJE POBLACIÓN INDÍGENA 2020
Ensenada	5.09	9.94	2.65	5.37
Mexicali	0.43	0.90	0.56	0.92
Tijuana	0.78	1.70	0.64	1.50
Tecate	0.81	1.95	0.64	1.47
Playas de Rosarito	1.10	2.61	0.94	2.25
San Quintín	Sin datos	Sin datos	14.90	30.50
TOTAL	1.32 %	2.71 %	1.31 %	2.72 %

Al separar el territorio de San Quintín del municipio de Ensenada, para el caso de Ensenada, el porcentaje de personas que hablan una lengua indígena disminuyó en un 47.94% mientras que el porcentaje de población indígena **disminuyó en un 45.98%**.

Por otra parte, la Sentencia que hoy se atiende, indica lo siguiente:

5. En lo tocante a la representación política en el Congreso del Estado, se deberá considerar la población indígena de cada uno de los distritos electorales en que se divide la entidad -diecisiete distritos (17)-, a fin de determinar "distritos indígenas"

En esa tesitura, lo procedente es determinar qué Distritos Electorales, de los diecisiete (17) en que se divide el territorio del Estado, tienen población indígena y en qué porcentaje, de tal suerte que las diputaciones sean en la proporción en que existe población indígena en cada distrito, y con ello se impulse objetivamente la participación de las comunidades indígenas que se han visto impedidas históricamente en el ejercicio al voto pasivo.

Respondiendo a lo anterior, se muestra la siguiente tabla:

Población total y su distribución según hablantes de lengua indígena y población indígena, a nivel distrital, en Baja California, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

DISTRITO	POBLACIÓN	HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA	%	POBLACIÓN INDÍGENA	%
I	146,777	748	0.51	1,732	1.18
II	176,920	562	0.32	1,128	0.64
III	187,474	721	0.38	1,299	0.69
IV	181,282	671	0.37	1,361	0.75
V	244,370	1,334	0.55	2,931	1.20
VI	182,656	1,477	0.81	3,742	2.05
VII	184,391	2,198	1.19	4,059	2.20
VIII	184,039	1,127	0.61	2,246	1.22
IX	193,379	1,044	0.54	2,119	1.10
X	183,897	1,619	0.88	3,345	1.82
XI	187,447	1,325	0.71	2,939	1.57
XII	150,007	1,539	1.03	3,783	2.52
XIII	211,012	1,579	0.74	3,816	1.81
XIV	184,147	1,035	0.56	2,384	1.29
XV	204,567	3,048	1.49	6,273	3.07
XVI	179,010	1,296	0.72	2,697	1.51
XVII	173,695	20,408	11.75	39,789	22.91
TOTAL	3,155,070	41,731	1.32	85,643	2.71

En donde se puede observar que el Distrito XVII, es el que concentra la mayor densidad de población en todo el estado, tanto de personas que hablan una lengua indígena, como de población indígena, de acuerdo con los criterios establecidos por el INEGI.

Con relación a lo anterior la Sentencia, indica lo siguiente:

"... el INE ha establecido que se considera Distrito indígena, "aquel que cuenta con un 40% o más de población indígena, lo que implica una amplia concentración en un territorio concreto. Por lo que personas que se consideran indígenas pueden residir en determinado Distrito, pero si no constituyen el 40% de la población de ese Distrito, entonces no será considerado como Distrito Indígena"; circunstancia que debe tomarse en consideración para establecer las acciones afirmativas que corresponda, sea para atender a dicho porcentaje, o bien para arribar a una consideración distinta, según los resultados que se arrojen, al determinar los distritos indígenas..."

Partiendo de los resultados obtenidos de la Tabla anterior, es posible determinar que el Distrito XVII cuenta con un porcentaje de 11.75% y 22.91%, de personas que hablan una lengua indígena y de población indígena respectivamente, sin embargo, no se alcanza el porcentaje del 40% establecido por el INE, por lo que se establece que el estado de Baja California no cuenta con "Distritos indígenas".

Al respecto, en el apartado 5.4.2. de la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-RAP-121/2020, se estableció lo siguiente:

"En ese sentido, esta Sala Superior ha reconocido que si bien existen demarcaciones con población mayoritariamente indígena, también lo es que existen otras en que la población indígena es minoritaria, pero finalmente existente, lo que por el solo hecho de carecer de un aspecto poblacional, no se sigue que deban carecer de representación política, pues al igual que toda la ciudadanía, cuentan con la posibilidad de postularse para todos los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, a pesar de la existencia natural de regímenes de gobierno diferenciados, en función de los distintos contextos normativos y fácticos, pues no debe perderse de vista que la normativa constitucional tiene como uno de sus objetivos eliminar las condiciones de vulnerabilidad en que históricamente han vivido los pueblos y comunidades indígenas, para acceder de manera igualitaria a los derechos que les garantizan su participación política en la vida pública.

*Esto, toda vez que la igualdad real o material y, particularmente, la igualdad sustantiva de oportunidades en favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas es un mandato expreso del artículo 2, Apartado B, de la CPEUM. Por ello, en términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la CPEUM, **se tiene que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, aun cuando la población indígena sea minoritaria.** También en esta parte cobra aplicación lo referido por Gerardo Durango Álvarez en relación con que la construcción de las políticas públicas inclusivas, dirigidas a lograr una mayor y eficaz participación política de los grupos socialmente excluidos de la esfera*

política, son fundamentales en un Estado democrático de derecho, tal como sucede con las acciones vinculadas con los grupos indígenas, afros, jóvenes y mujeres, lo que sin duda amplía el espectro de la democracia participativa, en la medida que abre la deliberación de dichas porciones poblacionales subrepresentados políticamente."

Por lo anterior, se contempla la implementación de acciones afirmativas, iniciando con un piso mínimo que permita expandir sus derechos, postulando fórmulas de candidaturas integradas por personas indígenas, con lo cual se alcanzaría una representatividad en las candidaturas de la población que integra este grupo.

En razón de ello, esta autoridad electoral, establecerá el **sistema de cuotas**, para que los partidos políticos realicen la postulación tal como se muestra a continuación:

- I. **De los ayuntamientos.** La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las planillas de regidurías de mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos indígenas, en cualquiera de las cinco planillas de Municipios.
- II. **En Diputaciones.** La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos indígenas, en alguno de los Distritos Electorales que integran el Estado.

Es importante mencionar que cada postulación deberá cumplir con los requisitos legales, por lo que el Instituto Electoral, revisará cada postulación bajo una perspectiva intercultural. Por otra parte, la postulación de las candidaturas que se establece en este artículo no son limitativas, por lo que adicionalmente los partidos políticos podrán incluir más candidaturas indígenas en las postulaciones que realicen por el principio de mayoría relativa.

Atento a lo expuesto, esta autoridad electoral **resalta que la medida adoptada satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en materia de derechos humanos**, en razón de que tienen un fin constitucional legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por el Estado Mexicano a través de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, desdoblar los alcances protectores del artículo 1º, párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, párrafo segundo, de la Constitución General, así como conforme al marco establecido por la legislación nacional desdoblar y dotar de contenido a la protección de derechos de las personas indígenas, procurando la maximización del ejercicio de sus derechos político-electorales de votar y ser votadas en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación popular.

La Acción Afirmativa que se instrumenta, **es idónea**, porque la medida adoptada es adecuada para construir un diseño que garantice el derecho de las personas indígenas para acceder a candidaturas a cargos de representación popular acorde con la argumentación antes desarrollada, y sin que esta autoridad electoral advierta vías distintas para concretar el avance en el ejercicio del derecho a ser votado que en favor de las personas indígenas que se persigue a través de la presente determinación.

Asimismo, la medida detallada se considera **necesaria**, en atención a que la Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas indígenas, específicamente por lo que hace a garantizar su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la legislación por sí sola no es suficiente para compensar y proteger el ejercicio de derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, lo que hace necesario implementar mecanismos que optimicen los alcances protectores de la legislación para concretar la tutela de derechos de los grupos minoritarios de la población como son las personas indígenas.

La medida que se implementa es **proporcional**, pues no se estima excesiva, al no constituir una limitación absoluta de ejercicio de derechos, antes bien es conveniente al lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas indígenas, en atención a que por primera vez se implementan mecanismos para garantizar y promover el acceso de este grupo de la población a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación popular, con lo que se garantiza su participación en la integración de los órganos legislativos del Estado mexicano.

La medida que se **instrumenta constituye un piso mínimo** quedando los Partidos Políticos y Coaliciones en libertad para que, conforme con su propia autodeterminación y autoorganización, de ser el caso, puedan postular más candidaturas a cargos de elección popular, a fin de favorecer la progresividad y optimización del ejercicio del derecho a ser votado de las personas indígenas.

V. Acción afirmativa a favor de personas de las Comunidades LGBTTIQ+

El Tribunal Local al dictar la sentencia que hoy se atiende, referente al Recurso de Inconformidad **RI-47-2020** y acumulados, en el apartado de "**Efectos**" mandató lo siguiente:

- *Comunidad LGBTI+ y personas con discapacidad.*
- 1. *Se determinará la población que integra cada uno de estos grupos vulnerables.*

2. *Se establecerá su participación histórica en los cargos de munícipes y diputaciones para determinar la subrepresentación.*

En primera instancia resulta importante destacar que como ya se ha referenciado en el presente acuerdo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a la fecha no cuenta con datos poblacionales que reflejen, a niveles geográficos la población de personas de la diversidad sexual.

Ahora bien por cuanto hace a la participación histórica en los cargos de munícipes y diputaciones de las personas de la diversidad sexual, únicamente se cuenta con antecedentes a nivel nacional referentes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, del que resulta un mínimo de candidaturas integradas por personas de la diversidad sexual, pues únicamente el Partido de la Revolución Democrática registró una (1) persona trans en una candidatura a diputación local de Campeche y dos (2) personas muxes en candidaturas a dos (2) diputaciones locales en Oaxaca; El Partido Verde Ecologista de México postuló dos (2) personas trans en la Ciudad de México, en candidaturas a una Alcaldía y una Concejalía; El Partido del Trabajo, registró a una persona trans como candidata a diputada federal y Los restantes partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena no postularon personas de la diversidad sexual en ninguna de sus candidaturas a cargos de elección popular.

A nivel estatal, de acuerdo a la información proporcionada la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, mediante oficio **CPPyF/027/2021**, en el que informó que no existen ante esta autoridad electoral registros formales que permitan conocer la participación política de personas de la población LGBTTIQ+ en la postulación o integración de órganos de gobierno, ya que, en los diversos formatos de registro de candidaturas implementados en los procesos electorales, no se establece la obligación de señalar la pertenencia a un grupo en situación de vulnerabilidad; ni así, ha sido manifestado de manera voluntaria por los ciudadanos y ciudadanas participantes en los procesos electorales.

Esta autoridad electoral está convencida, de que es impostergable e indispensable avanzar en la implementación de medidas que garanticen la inclusión y el avance en la protección de los derechos político-electorales de la comunidad de la diversidad sexual a efecto de que puedan participar de la construcción de la vida política en el país y con ello puedan incidir tanto en la agenda legislativa como en las políticas públicas.

V.1 Análisis de la norma estatutaria de Partidos Políticos

De igual modo es de señalar que esta autoridad electoral, con el propósito de dar mayor sustento a la implementación de acciones afirmativas, efectuó el análisis de la normativa estatutaria de los Partidos Políticos, tal como a continuación se precisa:

Que, de la revisión de los Documentos Básicos, de los partidos políticos se advierte que el **Partido Acción Nacional**³⁵, no establece cuestiones vinculadas con la identidad de género, o discriminación, no cuenta con algún órgano interpartidista vigilante y garante de la inclusión de las personas de la diversidad sexual, no contempla a las personas de la diversidad sexual para alguna candidatura, así mismo se advierte que no garantiza su inclusión entre sus militantes.

Igualmente, el **Partido Revolucionario Institucional**³⁶ no establece cuestiones vinculadas con la identidad de género, o discriminación, no cuenta con algún órgano interpartidista vigilante y garante de la inclusión de las personas de la diversidad sexual, no contempla a las personas de la diversidad sexual para alguna candidatura, así mismo se advierte que no garantiza su inclusión entre sus militantes.

Por su parte el **Partido de la Revolución Democrática**³⁷ en sus Estatutos establece que la integración de sus comités municipales y estatales contará con la Secretaría de Perspectiva de género y en su programa de acción prevé cuestiones vinculadas con la identidad de género y expresión de género³⁸.

Continuando con el **Partido del Trabajo**³⁹ no establece cuestiones vinculadas con la identidad de género, o discriminación, no cuenta con algún órgano interpartidista vigilante y garante de la inclusión de las personas de la diversidad sexual, no contempla a las personas de la diversidad sexual para alguna candidatura, así mismo se advierte que no garantiza su inclusión entre sus militantes.

En cuanto al **Partido Verde Ecologista de México**, en su Programa de Acción⁴⁰ refiere a la no discriminación por razones de orientación sexual.

35 Documento visible en la siguiente liga <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pan/ESTATUTOS%20PAN.pdf>

36 Documento visible en la liga: <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pr/ESTATUTOS%20PRI.pdf>

37 Documento visible en la liga: https://ieebc.mx/archivos/partidos/prd/PRD_PROGRAMA-ACCION.pdf

38 104.- Identidad. Sexo-genérica Se instituirán mecanismos legales para el reconocimiento de los derechos las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénicas, travestis e intersexuales. Se pugnaré porque se erradique cualquier forma de discriminación que impida el ejercicio de sus derechos a la atención de su salud o reconocimiento jurídico.

39 Documento visible en la liga: <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pt/ESTATUTOS%20PT.pdf>

40 1.- DERECHOS HUMANOS: El PVEM luchará por la plena vigencia de los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas; por la igualdad ante la ley y contra cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, culto, etnia, clase social, o cualquier otra. Luchará, igualmente, por la plena garantía de la libertad de expresión, y de los derechos de asociación y reunión, practicados en libertad y de modo pacífico. (documento visible en la liga: https://ieebc.mx/archivos/partidos/pvem/PROGRAMA%20DE%20ACCION_PVEM.pdf)

Así mismo el **Partido de Baja California**, en sus Estatutos⁴¹ refiere como uno de los derechos de sus militantes, la no discriminación por la orientación sexual de los mismos.

Por su parte **Movimiento Ciudadano**⁴² prevé en sus estatutos la procuración en el impulso para la participación de la comunidad trans.

En lo que refiere al partido **MORENA** prevé⁴³ en su estructura órganos de dirección una cartera dirigida a la diversidad sexual.

Por cuanto al **Partido Encuentro Social de Baja California**⁴⁴, no establece cuestiones vinculadas con la identidad de género o discriminación, no cuenta con algún órgano interpartidista vigilante y garante de la inclusión de las personas de la diversidad sexual, no contempla a las personas de la diversidad sexual para alguna candidatura, de igual manera se advierte que no garantiza su inclusión entre sus militantes.

Asimismo, el **Partido Encuentro Solidario**⁴⁵, no establece cuestiones vinculadas con la identidad de género o discriminación, no cuenta con algún órgano interpartidista vigilante y garante de la inclusión de las personas de la diversidad sexual, no contempla a las personas de la diversidad sexual para alguna candidatura, por tanto, se advierte que no garantiza su inclusión entre sus militantes.

Por otra parte, el **Partido Redes Sociales Progresistas** en su Declaración de Principios⁴⁶ prevé cuestiones vinculadas con la no discriminación por orientación sexual.

41 Artículo 9 de sus estatutos, documento visible en la liga:
<https://ieebc.mx/archivos/partidos/pebc/estatutospbc2018.pdf>

42 Documento visible en la liga: <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pmc/estatutosmc.pdf>

ARTÍCULO 4 Movimiento de Mujeres y Hombres.

(...)

6. Movimiento Ciudadano comprometido con las causas de la sociedad civil, los intereses superiores de la Nación, así como los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, impulsa la participación ciudadana de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, personas adultas mayores, de los mexicanos residentes en el extranjero, de la comunidad trans, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas, entre otros, cuya labor permanente, destaca su importancia para la vida política, económica, social y cultural del país, bajo el principio de igualdad sustantiva.

43 Artículo 32º. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años.

(...)

Estará conformado por un mínimo de seis personas, garantizando la paridad de género, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:

(...) I. secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero en el estado, así como de difundir la lucha de MORENA. Documento visible en la liga: <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pmorena/ESTATUTOS%20MORENA%20FRACC%20II.pdf>

44 Documento visible en la liga: <https://www.ieebc.mx/documentos-generales/#1599211430984-8ca0b9de-5afb>

45 Documento visible en la liga:
<https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/pencuentrosolidario/cpppencuentrosolidarioprogramadeaccion04092020.pdf>

46 Documento visible en la liga:
<https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/predes/depprpsdeclaracionprincipios19102020.pdf>

El **Partido Fuerza por México**, en sus estatutos⁴⁷ prevé cuestiones vinculadas con la no discriminación por orientación sexual.

En conclusión, se tiene que únicamente los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Baja California, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Redes Progresistas, prevén en sus documentos básicos cuestiones vinculadas con la identidad de género y expresión de género, la comunidad trans, la no discriminación; y solo MORENA prevé en su estructura de órganos de dirección una cartera dirigida a la diversidad sexual, pero ninguno de estos incluyen medidas específicas para promover el acceso de este sector de la población a candidatura a cargos de elección popular ni mecanismos para favorecer su inclusión en la representación política.

V.2 Cumplimiento de Sentencia

Por tanto, atendiendo a los criterios antes descritos, es clara la obligación que tiene este Instituto Electoral para adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar tanto la paridad de género como la diversidad y no discriminación en la integración de los Ayuntamientos del Estado, cuya renovación son objeto del Proceso Electoral que nos ocupa, y que a su vez permita respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por ello, está plenamente justificada constitucionalmente y legalmente, la facultad de este Consejo General, para aprobar las acciones afirmativas que se proponen.

Si se tiene presente, por un lado, la representatividad que deben tener las personas de la diversidad sexual y, por el otro, que el actual Proceso Electoral dio inicio el pasado 6 de diciembre; el avance de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los acuerdos realizados por los partidos políticos respecto a sus alianzas para la competencia electoral, respecto de las cuales ya han presentado para su registro los convenios de coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de forma progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente Proceso Electoral se logre la integración de un porcentaje suficiente para incrementar la participación de esta comunidad en las candidaturas propuestas por los partidos políticos y coaliciones y que a su vez resulte significativo para que se transforme en una inclusión continua de este sector de la población en la vida política del Estado.

Por ello, se estima que debe establecer un piso mínimo que permita expandir los derechos de las comunidades LGBTTIQ+ a través del sistema de cuotas, en razón de ello, esta autoridad, considera que los Partidos Políticos, Coaliciones y candidaturas independientes, deberán realizar la postulación tal y como se muestra a continuación:

⁴⁷ Documento visible en la liga: <https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/pfuerza/depppfsmestatutos19102020.pdf>

I. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación de al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos de las Comunidades LGTBTTIQ+, en cualquiera de las cinco planillas de Municipios (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos que conforman el Estado.

La medida que se implementa, no es contraria ni vulnera el principio de paridad de género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto en situación de desventaja, por lo que no afecta ni es desproporcionada o irrazonablemente el referido principio.

Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para acreditar la calidad de las Comunidades LGTBTTIQ+ será suficiente con la sola auto adscripción que de dicha circunstancia realice la persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora de los derechos de la diversidad sexual, según la cual el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones.

En caso de que se postulen **Personas Trans**, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que en la **solicitud de registro de candidatura el partido político deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual** con el propósito de constatar el cumplimiento de la nominación de la candidatura que atiende la acción afirmativa que se propone y de las cuestiones relativas a la paridad de género

En caso de Coaliciones Parciales o Flexibles, las personas de la diversidad sexual postuladas por éstas se sumarán a las que postulan en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

Esta autoridad electoral, **destaca que la medida adoptada satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad** y, por tanto, es ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos, por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I,

párrafo segundo, de la Constitución General en cuanto a favorecer la inclusión y el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser votado de un sector de la población que históricamente ha sido estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad sexual.

La medida adoptada es **idónea** por tratarse de un mecanismo acorde para optimizar y garantizar el derecho de las personas de la diversidad sexual para ejercer su derecho político-electoral a ser votado en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de elección popular -conforme con la argumentación antes desarrollada-, y para ese fin, este Consejo General no advierte medidas distintas que puedan garantizar y compensar de manera efectiva la tutela de ese derecho en favor de este grupo minoritario de la población.

De igual modo, la acción afirmativa que se implementa es **necesaria**, en razón de que el marco legal electoral actual no prevé un reglado que instituya y garantice medidas compensatorias a fin de asegurar que las personas de la diversidad sexual puedan acceder a candidaturas a cargos de representación popular, para con ello revertir los indicadores casi nulos de postulación.

La medida que se implementa es **proporcional**, pues no se estima excesiva, al no constituir una limitación absoluta de ejercicio de derechos, antes bien es conveniente al lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual, en atención a que por primera vez se implementan mecanismos para garantizar y promover el acceso de este grupo de la población a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación popular, con lo que se garantiza su participación en la integración de los órganos legislativos del Estado Mexicano.

Asimismo, la **medida constituye un piso mínimo** quedando los Partidos Políticos en libertad para que, conforme a su propia autodeterminación y autoorganización, puedan postular más candidaturas a favor de la inclusión y el acceso de las personas de la población LGBTTIQ+ a postulaciones a cargos de elección popular.

VI. Acción afirmativa a favor de Personas con Discapacidad

Que tal como se ordenó en la Sentencia, se deberá determinar la población que integran las personas con discapacidad que reside en el estado de Baja California, se tiene que a nivel estatal el porcentaje de personas con discapacidad es de **4.03%**. En lo que concierne a nivel municipal la distribución de personas con discapacidad es la siguiente:

MUNICIPIO	POBLACIÓN	POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE %
Ensenada	44,3807	20,367	4.59
Mexicali	1'049,792	44,519	4.25
Tijuana	1'922,523	71,235	3.71
Tecate	108,440	4,104	3.78
Playas de Rosarito	126,890	5,391	4.25
San Quintín	117,568	6,329	5.38
Total	3'769,020	151,945	4.03

Ahora bien, en lo que se refiere a las candidaturas de personas con discapacidad a Cargos Federales, según los resultados del estudio formulado por el Instituto Nacional Electoral en 2018, denominado "Personas con Discapacidad postuladas por los partidos políticos a cargos de elección popular en las elecciones federales y concurrentes del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se obtuvieron los siguientes resultados:

NO.	ENTIDAD ⁴⁸	CARGOS FEDERALES				TOTAL
		DIPUTACIÓN MR	DIPUTACIÓN RP	SENADURÍA MR	SENADURÍA RP	
1	Baja California		1			1
2	CDMX		2			2
3	Coahuila	1				1
4	Colima			1		1
5	Hidalgo		3			3
6	México		2			2
7	Michoacán		1			1
8	Morelos	1				1
9	Nuevo León		1			1
10	SLP			1		1
11	Tamaulipas	1				1
12	Veracruz		1			1
13	Yucatán		1			1
14	Zacatecas			1		1
	Nacional				1	1
TOTAL		3	12	3	1	19
PORCENTAJE		15.79%	63.16%	15.79%	5.26%	100%

48 De las 32 entidades federativas, 18 no postularon personas con discapacidad como candidatas a algún Cargo Federal: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

Es importante referir, que a nivel estatal según la respuesta obtenida por parte de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, mediante oficio **CPPyF/027/2021**, se señaló que **no existen ante esta autoridad electoral registros formales que permitan conocer la participación política de las personas con discapacidad** en la postulación o integración de órganos de gobierno, ya que, en los diversos formatos de registro de candidaturas implementados en los procesos electorales, no se establece la obligación de señalar la pertenencia a un grupo en situación de vulnerabilidad; ni así, ha sido manifestado de manera voluntaria por los ciudadanos y ciudadanas participantes en los procesos electorales.

Sin embargo, de la base de datos del Registro de candidatas y candidatos de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 2018-2019, proporcionada mediante el oficio antes referido, se tiene el registro de 2 personas, que aun y cuando no se manifiesta de manera formal el tipo de discapacidad, su condición de discapacidad física es un hecho notorio y evidente.

NOMBRE	PARTIDO	CANDIDATURA	PROCESO ELECTORAL
C. Julián Leyzaola Pérez	Partido Encuentro Social	Ayuntamiento de Tijuana	Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016
	Partido de la Revolución Democrática	Presidencia Municipal de Tijuana	Proceso Electoral Local Ordinario de 2018-2019
C. Karen Pamela Rocha Ruiz	otrora Partido Político Municipalista de Baja California	Diputación en el Distrito Electoral III	Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016
	Partido Movimiento Ciudadano	Diputación	Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019

VI.1 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

Esta autoridad electoral, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia, en cuyo punto resolutivo Cuarto ordenó:

"...Cuarto. Se ordena al Instituto Estatal Electoral de Baja California, que analice y, en su caso, implemente acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGTBI+, personas con discapacidad y jóvenes, en términos de la presente sentencia..."

Como ya se dijo, en los efectos de la Sentencia de mérito, estableció que se determinará la población que integra cada uno de estos grupos en desventaja como son las comunidades LGTBTTIQ+ y personas con discapacidad, y además que se establezca su participación histórica en los grupos de Municipios y Diputaciones, para determinar la subrepresentación.

En tal virtud y con el fundamento internacional anteriormente citado tiene rango constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia de observancia obligatoria para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, a fin de revertir y compensar la situación de desventaja que han sufrido las personas con discapacidad, para que estas alcancen una igualdad sustancial, se considera la pertinencia de implementar acciones afirmativas a su favor.

Aunado a que la Sala Superior ha señalado que todas las autoridades del Estado se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad y también ha considerado en diversas ejecutorias⁴⁹, que las llamadas cuotas electorales constituyen una acción afirmativa a través de la cual, se establece una preferencia o distinción a favor de un grupo que se encuentra en una situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos con el objetivo de revertir y compensar esa situación para alcanzar una igualdad sustancial.

En este sentido, las acciones afirmativas en materia político electoral, establecidas a favor de este grupo que se encuentra en minoría, se conciben en el sistema jurídico como una herramienta encaminada a garantizar la equidad en el acceso a los cargos de elección popular, razón por la cual constituyen un elemento esencial del sistema democrático.

En consecuencia, para cumplir y acatar lo ordenado por el Tribunal Electoral, lo conducente es determinar la forma en que se aplicará la acción afirmativa para personas con discapacidad con el objeto de optimizar el derecho al sufragio pasivo de las personas pertenecientes a este grupo de exclusión sistemática e invisibilizados socialmente. Para tales efectos, se parte de que de los **3'769,020**⁵⁰ de personas que habitan en el Estado de Baja California, el **4.03%** (151,945) son personas con discapacidad.

En razón de ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de las 151,945 personas que se encuentren dentro de este grupo, postulando fórmulas de candidaturas integradas por

⁴⁹ <https://www.iee.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00963-2015.htm>

⁵⁰ Censo de Población y Vivienda del 2020.

personas con discapacidad, con lo cual se alcanzaría una representatividad en las candidaturas de la población que integra este grupo.

En razón de ello, esta autoridad electoral, establece el sistema de cuotas, para que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, realicen la postulación tal como se muestra a continuación:

- I. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación de al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos con alguna discapacidad, en cualquiera de las cinco planillas de Municipales (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos que conforman el Estado.

Que al efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, fracción I de la Constitución Local, para ocupar una diputación local o formar parte en la integración de un ayuntamiento del estado, la persona interesada deberá estar plenamente en ejercicio de sus derechos políticos.

Para garantizar que quienes accedan a candidaturas a través de esta acción afirmativa sean personas con discapacidad, será necesario que al momento de su registro, los Partidos Políticos presenten algún documento original que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad, siendo una certificación médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, el medio más idóneo, en la que se deberá especificar el tipo de discapacidad (física, sensorial, mental o intelectual) y que la misma es de carácter permanente, aunado a que deberá contener el nombre, firma autógrafa y número de cédula profesional de la persona médica que la expide, así como el sello de la institución.

El cumplimiento de estos requisitos deberá verificarse por la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento o por los Consejos Distritales, al momento de resolver sobre la procedencia de la solicitud de registro, sin embargo, podrá realizarse la valoración por el Consejo General con antelación a la Jornada Electoral. En ningún caso, la verificación o valoración se realizará respecto de la naturaleza o gradualidad de la discapacidad.

Asimismo, se podrá exhibir copia fotostática legible del anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad vigente⁵¹, la cual es emitida de—

⁵¹ Los requisitos para obtener la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad son: acta de nacimiento, Constancia de Discapacidad emitida por una persona médica especialista o por el SNDIF y CURP. Asimismo, los requisitos para obtener la Constancia de Discapacidad Permanente que otorga el SNDIF son: acta de nacimiento, CURP, credencial para votar vigente, comprobante de domicilio y un resumen clínico emitido por una persona médica especialista que acredite el diagnóstico de discapacidad (con vigencia máxima de un año), este Resumen clínico puede ser del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o persona médica privada. Fuentes: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/credencial-nacional-para-personas-con-discapacidad/DIF5939> y <https://www.gob.mx/difnacional/articulos/credencial-nacional->

forma gratuita por el Sistema Nacional DIF (SNDIF), organismo público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada del Gobierno Federal.

Adicionalmente, se deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en la que la persona candidata manifieste que es una persona con algún tipo de discapacidad y que enfrenta de manera cotidiana y permanente barreras en razón de la discapacidad con la que vive.

Atento a lo expuesto, esta autoridad electoral resalta que la medida adoptada **satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad** y, por tanto, se ajusta al bloque en materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por el Estado Mexicano a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desdoblar los alcances protectores del artículo 1º, párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, párrafo segundo, de la Constitución General, así como conforme al marco establecido por la legislación nacional desdoblar y dotar de contenido a la protección de derechos de las personas con discapacidad, específicamente procurando la maximización del ejercicio de sus derechos político-electorales de votar y ser votadas en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación popular.

La acción afirmativa que se instrumenta es **Idónea**, porque la medida adoptada es adecuada para construir un diseño que garantice el derecho de las personas con discapacidad para acceder a candidaturas a cargos de representación popular acorde con la argumentación antes desarrollada, **y sin que esta autoridad electoral advierta vías distintas** para concretar el avance en el ejercicio del derecho a ser votado que en favor de las personas con discapacidad que se persigue a través de la presente determinación.

Asimismo, la medida detallada se considera **necesaria**, en atención a que la Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, específicamente por lo que hace a garantizar su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la legislación por sí sola no es suficiente para compensar y proteger el ejercicio de derechos de las personas pertenecientes a grupos en desventaja, lo que hace necesario implementar mecanismos que optimicen los

alcances protectores de la legislación para concretar la tutela de derechos de los grupos minoritarios de la población como son las personas con discapacidad.

La medida que se implementa es **proporcional**, pues no se estima excesiva, al no constituir una limitación absoluta de ejercicio de derechos, antes bien es conveniente al lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, en atención a que por primera vez se implementan mecanismos para garantizar y promover el acceso de este grupo de la población a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación popular, con lo que se garantiza su participación en la integración de los órganos legislativos.

La **medida que se instrumenta constituye un piso mínimo** quedando los Partidos Políticos y Coaliciones en libertad para que, conforme con su propia autodeterminación y autoorganización, de ser el caso, puedan postular más candidaturas a cargos de elección popular, a fin de favorecer la progresividad y optimización del ejercicio del derecho a ser votado de las personas con discapacidad.

VII. Acción afirmativa en favor de las Juventudes

Que en razón de lo que ordenó en la Sentencia, de la investigación realizada por este Instituto se advierte que la población total en nuestro País es de 129'014,024 habitantes, de los cuales 24'729,112 son personas jóvenes, lo que representa el 19.16 % de la población total; ahora bien por lo que respecta al **Estado de Baja California** de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 la población total es de **3'379,020** de los cuales **800,652** corresponden a personas en un rango de edad de 18 a 29, lo que representa el **21.24%** de la población total en el Estado.

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos de la lista nominal y el padrón electoral con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se advierte que la población joven representa el **27.27% del Listado Nominal** y el 27.51% del Padrón Electoral, de acuerdo a los siguientes datos:

Listado Nominal Estatal y distribución de jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel municipal, en Baja California.

MUNICIPIO	LISTA NOMINAL	LISTA NOMINAL POBLACIÓN JOVEN DE 18 A 29 AÑOS	
	TOTAL	TOTAL	PORCENTAJE
Ensenada	408,149	115,384	28.27%
Mexicali	805,200	210,338	26.12%
Playas de Rosarito	101,504	26,510	26.12%

Tijuana	1'469,345	407,682	27.71%
Tecate	86,530	23,188	29.79%
TOTAL	2'870,728	783,102	27.27%

Fuente: Junta Local Ejecutiva, Instituto Nacional Electoral, diciembre de 2020.

Padrón Electoral Estatal y distribución de jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel municipal, en Baja California.

MUNICIPIO	PADRÓN ELECTORAL	PADRÓN ELECTORAL POBLACIÓN JOVEN DE 18 A 29 AÑOS	
	TOTAL	TOTAL	PORCENTAJE
Ensenada	414,328	117,913	28.45%
Mexicali	816,680	215,224	26.35%
Playas de Rosarito	103,809	27,375	26.37%
Tijuana	1'491,691	417,531	27.99%
Tecate	87,971	23,786	27.03%
TOTAL	2'914,479	801,829	27.51%

Fuente: Junta Local Ejecutiva, Instituto Nacional Electoral, diciembre de 2020.

Y se encuentran distribuidos de manera distrital tal y como se observa en la siguiente tabla de la que se desprende que, en 8 de los 17 Distritos, existe una población de jóvenes con un porcentaje mayor al 27.27% lo que representa el **47.05%** de la Lista Nominal:

Lista Nominal Estatal y distribución de jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel distrital, en Baja California

DISTRITO	LISTA NOMINAL	LISTA NOMINAL JÓVENES 18-29 AÑOS	PORCENTAJE
I	165,969	46,233	27.85%
II	163,490	43,725	26.74%
III	166,367	35,981	21.62%
IV	156,747	40,342	25.73%

V	152,625	44,056	28.86%
VI	164,518	48,774	29.64%
VII	174,187	55,944	32.11%
VIII	175,682	46,605	26.52%
IX	163,473	36,222	22.15%
X	169,384	38,273	22.59%
XI	169,362	44,927	26.52%
XII	161,544	46,059	28.51%
XIII	187,263	54,221	28.95%
XIV	190,463	59,845	31.42%
XV	188,677	48,418	25.66%
XVI	166,170	42,806	25.76%
XVII	154,807	50,671	32.73%
TOTAL	2,870,728	783,102	27.27%

Fuente: Junta Local Ejecutiva, Instituto Nacional Electoral, diciembre de 2020.

VII.1 Participación histórica de las Juventudes

Con el fin de establecer la participación de las personas jóvenes en los últimos procesos electorales locales, se toman en cuenta los datos del Proceso Electoral Local 2018-2019, lo anterior, en virtud que en procesos anteriores no se contaba con la información referente al rango de edad, ya que fue hasta la implementación del Sistema Nacional de Registro de Candidatos y Candidatos aprobado por el INE (SNR), que se estableció la obligatoriedad por parte de los Partidos Políticos de registrar datos referentes al rango de edad de sus candidatas y candidatos.

A continuación, se muestran los registros de candidaturas, del Proceso Electoral Local antes referido, correspondientes a propietarias y propietarios de personas jóvenes entre 18 y 29 años:

**REGISTRO DE CANDIDATURAS DE PERSONAS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS (PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2018-2019)**

NÚM.	PARTIDO	PROPIETARIO	DISTRITO	MUNICIPIO	TIPO DE CANDIDATURA	NOMBRE	EDAD	CANDIDATURA ELECTA
1	CANDIDATURA INDEPENDIENTE	PROPIETARIO	4	PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	ESTRADA VIZCARRA JUANITA MARIELY	24	
2		PROPIETARIO	4	MEXICALI	DIPUTACION LOCAL MR	FLORES AGUIRRE FERNANDA ANGELICA	24	
3		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	GONZALEZ OSUNA JESUS ENRIQUE	25	
4		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	PEÑUELAS VALENCIA ALEXIS IVAN	24	
5		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERAZA ESTRADA KEVIN FERNANDO	25	
6		PROPIETARIO		ENSENADA	REGIDURIA MR	RUVALCABA GARCIA FRANCISCO	23	
7	COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA"	PROPIETARIO	10	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	GONZALEZ QUIROZ JULIA ANDREA	24	Asignación directa
8		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	LOPEZ HERNANDEZ JOSE RAMON	28	Asignación directa
9		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	OCHOA MONTELONGO JOSE FELIX	25	Asignación directa
10	MC	PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	CALDERA YERAMAGDALENA	29	
11		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	LABORIN VILLASEÑOR GABRIELA	24	
12		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	QUIROZ MATIES SAUL	26	
13	PAN	PROPIETARIO	3	MEXICALI	DIPUTACION LOCAL MR	ROCHA RUIZ KAREN PAMELA	29	
14		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	ECHEVARRIA BARRA JUAN DIEGO	26	Regiduría asignación RP
15		PROPIETARIO		TECATE	SINDICATURA MR	GASTELUM CASTRO JULIAN HORACIO	25	
16	PBC	PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	ALMANZA OZUNA MARTIN ALEXANDRO	27	
17		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	AVILEZ SANCHEZ YESSICA LIZBETH	28	
18		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	BECERRA HERNANDEZ DIANA GUADALUPE	27	
19		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	CORONA RODRIGUEZ ALAN DANIEL	29	
20		PROPIETARIO	11	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	CORTES RODRIGUEZ JOEL DAVID	26	
21		PROPIETARIO		TECATE	SINDICATURA MR	CORTEZ AVILA JOSE FERNANDO	25	
22		PROPIETARIO		TECATE	REGIDURIA MR	FARIAS RODRIGUEZ CAREN YDANA	20	
23		PROPIETARIO	7	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	GARNICA JAUREGUI BOGAR OMAR	24	
24		PROPIETARIO		TECATE	REGIDURIA MR	MURILLO FLORES JENIFER NALLELY	18	
25		PROPIETARIO	13	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	ORTIZ SAavedra GLORIA MONSERRAT	23	
26		PROPIETARIO	9	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	OTAREZ LICONA RODRIGO ANIBAL	27	Diputación asignación RP
27		PROPIETARIO		TECATE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PEREZ AMPUDIA SARAH	26	
28		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	SALAZAR GONZALEZ HELIODORO	28	
29		PROPIETARIO	S/D		DIPUTACION LOCAL RP	VALENZUELA ASTORGA NELSON MANUEL	23	
30		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	VARGAS GONZALEZ ELEUTER	27	

**REGISTRO DE CANDIDATURAS DE PERSONAS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS (PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2018-2019)**

NÚM.	PARTIDO	PROPIETARIO	DISTRITO	MUNICIPIO	TIPO DE CANDIDATURA	NOMBRE	EDAD	CANDIDATURA ELECTA
31	PRD	PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	DOMINGUEZ HERAS SANTIAGO	26	
32		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	GARCIA REYNOSO BARBARA	23	
33		PROPIETARIO		ENSENADA	REGIDURIA MR	MIRANDALIERA JAVIER EDUARDO	28	
34		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	MONTOYA VARGAS BRYAN IVAN	27	
35		PROPIETARIO		TECATE	REGIDURIA MR	PEREZ MUNGUIA KARLA VIVIANA	29	
36		PROPIETARIO		PLAYAS DE ROSARITO	REGIDURIA MR	RODRIGUEZ GARDEA YESENIA SOLEDAD	29	
37		PROPIETARIO		ENSENADA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUEDA ALVAREZ JENIFER	25	
38		PROPIETARIO	S/D	S/D	DIPUTACION LOCAL RP	SANDOVAL VALDIVIA SIMON	23	
39	PRI	PROPIETARIO		TECATE	REGIDURIA MR	COTAMUÑOZ ROMAN	26	Regiduría asignación RP
40		PROPIETARIO	7	TIJUANA	DIPUTACION LOCAL MR	HERNANDEZ ROJAS PEDRO ALAN	28	
41		PROPIETARIO		ENSENADA	REGIDURIA MR	LARA ARREGUI DIEGO ALEJANDRO	27	Regiduría asignación RP
42		PROPIETARIO	S/D	S/D	DIPUTACION LOCAL RP	LARA RIVERA DANIELA	25	
43		PROPIETARIO		MEXICALI	REGIDURIA MR	MUÑOZ CASADO FERNANDA	28	
44		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	RAYAS SANCHEZ JOSE IGNACIO	26	
45		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	SANCHEZ AVILA JOSE ALFREDO	27	
46		PROPIETARIO		TIJUANA	REGIDURIA MR	VEGA SANCHEZ ARISBETH	20	
47	TRANSFORMEMOS	PROPIETARIO	S/D	S/D	DIPUTACION LOCAL RP	MORENO RAMIREZ CLAUDIA LISBETH	28	
48		PROPIETARIO	S/D	S/D	DIPUTACION LOCAL RP	VARGAS TERRONES ANTONIO DE JESUS	27	

Fuente: Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2021.

Es importante destacar que el total de registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local antes mencionado, fue de 436 registros, y como se puede apreciar en la tabla anterior, únicamente 48 registros de candidaturas correspondieron a personas jóvenes de 18 a 29 años, lo que representa el **11.00%**.

Por partidos políticos el panorama es distinto, como se puede apreciar el Partido de Baja California es el que tiene el porcentaje de registro de candidaturas para personas jóvenes más alto con un 23.07%, como se muestra en la siguiente tabla:

REGISTRO DE CANDIDATURAS DE PERSONAS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS (PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019)

PARTIDO POLÍTICO	TOTAL DE CANDIDATURA REGISTRADAS	TOTAL DE CANDIDATURAS REGISTRADAS DE 18 A 29 AÑOS	PORCENTAJE AL QUE EQUIVALEN LAS CANDIDATURAS JÓVENES
PAN	65	2	3.07 %
PRI	65	8	12.30 %
PRD	65	8	12.30 %
PT	4	0	0 %
VERDE	4	0	0 %
PBC	65	15	23.07 %
MC	65	4	6.15 %
MORENA	4	0	0 %
TRANSFORMEMOS	4	2	50 %
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" (MORENA-VERDE-PT-TRANSFORMEMOS)	61	3	4.92 %
CANDIDATURA INDEPENDIENTE	34	6	17.64 %

Fuente: Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2021.

Sin embargo, de los registros de candidaturas correspondientes a personas jóvenes de 18 a 29 años, únicamente 19 de las 48 fórmulas estaban integradas por persona propietaria y suplente joven, como se muestra a continuación: —

**CANDIDATURAS DE PERSONAS JOVENES (PROPIETARIO Y SUPLENTE) PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2018-2019**

Núm.	PARTIDO	TIPO DE CANDIDATURA	DISTRITO	MUNICIPIO/DISTRITO	NOMBRE (PROPIETARIO)	EDAD	NOMBRE (SUPLENTE)	EDAD	FÓRMULAS ELECTAS
1	CANDIDATURA INDEPENDIENTE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		PLAYAS DE ROSARITO	PERAZA ESTRADA KEVIN FERNANDO	25	MEDRANO CAUDILLO ISIDRO	25	
2		REGIDURÍA MR		PLAYAS DE ROSARITO	ESTRADA VIZCARRA JUANITA MARIELY	24	ESCOBEDO SEVILLA ZAIN EYDA	21	
3		DIPUTACIÓN LOCAL MR	4	MEXICALI	FLORES AGUIRRE FERNANDA ANGELICA	24	DE LA TORRE GARCIA BRENDA VALERIA	26	
4	PAN	SINDICATURA MR		TECATE	GASTELUM CASTRO JULIAN HORACIO	25	MORALES GONZALEZ ERICK FRANCISCO	27	
5	PBC	REGIDURÍA MR		TECATE	MURILLO FLORES JENIFER NALLELY	18	JIMENEZ FLORES BRENDA JAQUELINE	22	
6		REGIDURÍA MR		MEXICALI	ALMANZA OZUNA MARTIN ALEXANDRO	27	VALLE DROPEZA ERICK OMAR	27	
7		REGIDURÍA MR		TECATE	FARIAS RODRIGUEZ CAREN YOANA	20	VALLEJO AGUIRRE ANA DARYNKA	26	
8		DIPUTACIÓN LOCAL MR	7	TIJUANA	GARNICA JAUREGUI BOGAR OMAR	24	ALBA ALVAREZ JOSE LUIS	24	
9		SINDICATURA MR		TECATE	CORTES AVILA JOSE FERNANDO	26	TORRES DE LA TORRE OCTAVIO	22	
10		REGIDURÍA MR		TIJUANA	BEGERRA HERNANDEZ DIANA GUADALUPE	27	RODRIGUEZ FLORES DAMARIS	20	
11		DIPUTACIÓN LOCAL MR	11	TIJUANA	CORTES RODRIGUEZ JOEL DAVID	25	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN MANUEL	24	
12	PRD	REGIDURÍA MR		TIJUANA	AVILEZ SANCHEZ YESSICA LIZBETH	26	CERVANTES MURGUIA ILSE	19	
13		REGIDURÍA MR		TECATE	PEREZ MUNGUIA KARLA VIVIANA	28	SOTO MACIAS KARINA	22	
14		REGIDURÍA MR		ENSENADA	MIRANDA LIERA JAVIER EDUARDO	28	ALONSO ALBAÑEZ JOSE CARLOS ESTUARDO	27	
15		REGIDURÍA MR		TIJUANA	DOMINGUEZ HERAS SANTIAGO	26	LOPEZ HERNANDEZ JUAN ADRIAN	26	
16		REGIDURÍA MR		MEXICALI	MONTAYA VARGAS BRYAN IVAN	27	LOZANO PERNADO GUSTAVO ANTONIO	24	
17	PRI	REGIDURÍA MR		TIJUANA	VEGA SANCHEZ ARISBETH	20	PEREZ FABELA FANNY	24	
18		REGIDURÍA MR		TIJUANA	RAYAS SANCHEZ JOSE IGNACIO	26	RODRIGUEZ RAMIREZ ERICK ANTONIO	27	
19		REGIDURÍA MR		ENSENADA	LARA ARREGUI DIEGO ALEJANDRO	27	BARBOSA GUTIERREZ IVAN	24	Regiduría asignada por RP

Fuente: Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2021.

En la siguiente tabla se muestra el concentrado de los registros antes mencionados y es posible identificar que únicamente 7 candidaturas fueron electas, para jóvenes de 18 a 29 años, mientras que solo una fórmula de propietaria o propietario y suplente jóvenes, resulto electa:

**CANDIDATURAS DE PERSONAS JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS, POSTULADAS POR PARTIDOS
POLÍTICOS Y COALICIONES (PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019)**

PROCESO ELECTORAL LOCAL	TOTAL DE CANDIDATURAS REGISTRADAS	TOTAL DE CANDIDATURAS REGISTRADAS DE PERSONAS JÓVENES (PROPIETARIAS Y PROPIETARIOS) (18-29 AÑOS)	TOTAL DE CANDIDATURAS ELECTAS DE PERSONAS JÓVENES (18-29 AÑOS)	FÓRMULAS DE PERSONAS JÓVENES REGISTRADAS	FÓRMULAS DE PERSONAS JÓVENES ELECTAS
2018-2019	436	48	7	19	1

Fuente: Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2021.

En el siguiente cuadro es posible establecer que los cargos de elección popular a los que únicamente han tenido acceso las personas jóvenes de 18 a 29 años son en regidurías y diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, respectivamente, siendo este último el que mayor porcentaje de personas jóvenes electas tiene.

CARGOS ELECTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

TIPO DE CANDIDATURA	TOTAL DE CANDIDATURAS ELECTAS	TOTAL DE CANDIDATURAS ELECTAS DE PERSONAS JÓVENES	PORCENTAJE EQUIVALENTE DE CANDIDATURAS ELECTAS DE PERSONAS JÓVENES
Gubernatura	1	0	0 %
Diputaciones MR	17	1	5.82 %
Diputaciones RP	8	1	12.5 %
Presidencia Municipal	5	0	0 %
Sindicaturas	5	0	0 %
Regidurías	63	5	7.93 %
TOTAL	99	7	7.07 %

Fuente: Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 2021.

Del análisis anterior, es posible observar que en el Proceso Electoral Local 2018-2019 la participación de personas jóvenes de 18 a 29 años fue muy baja, alcanzando únicamente el 11% del total de las candidaturas registradas. Mientras que, de las 99 candidaturas electas, solo tuvieron acceso a 7 cargos de elección popular, lo que representó el 7.07%. Además, es posible determinar que no tuvieron acceso a las candidaturas para la presidencia municipal, ni para las sindicaturas. Situación que pone en evidencia la necesidad de implementar acciones afirmativas en favor de este grupo en desventaja que les permitan incrementar su porcentaje de participación en los cargos de elección popular.

VII.2 Análisis de la Norma Estatutaria de Partidos Políticos

Transciende que los partidos políticos, contemplan la participación juvenil dentro de sus Documentos Básicos, sin embargo, esto no se ha traducido en una representación efectiva de la juventud, pues no en todos los casos esa participación se traduce en la postulación a cargos de elección popular, sino sólo para algunos cargos intrapartidarios relacionados con el tema de la juventud.

En lo que respecta al **Partido Revolucionario Institucional**, dispone, en el artículo 45 de sus estatutos, que se impulsará a las personas jóvenes en el 30% de las candidaturas.⁵²

⁵² <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pri/ESTATUTOS%20PRI.pdf>

En el caso del **Partido Acción Nacional**, en el numeral 44 de sus Estatutos, solo contempla la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, sin establecer el alcance de quiénes la integran en los procesos electorales.⁵³

En cuanto al **Partido de la Revolución Democrática**, contempla en sus reglas democráticas que rigen la vida interna del mismo como principio básico, la garantía de participación en los congresos y consejos, así como a postular candidaturas de representación proporcional a personas menores de 30 años.⁵⁴

Por su parte el **Partido del Trabajo**, no contempla nada respecto a la participación de la juventud, en sus estatutos.⁵⁵

Por lo que hace al **Partido Verde Ecologista de México**, en sus Estatutos sólo contempla una Secretaría de Asuntos de la Juventud, de conformidad con el artículo 68, fracción VI, sin establecer acciones propias para este sector, ni ámbito de participación.⁵⁶

En lo que respecta al **Partido de Baja California**, en sus Estatutos contempla una Secretaría de Acción Juvenil, y como una de las atribuciones de la misma el fomentar la participación de personas jóvenes en los cargos de elección popular.⁵⁷

En cuanto al **Partido Movimiento Ciudadano**, en el artículo 52 de sus Estatutos contempla la organización denominada "Jóvenes en Movimiento" con un rango de edad de 14 a 29 años. Establece que los jóvenes en el rango de edad de 19 a 29 años, tendrán representación ante la Convención Nacional Democrática, con cuarenta delegadas y delegados, así como ante las Convenciones Estatales con veinte delegadas y delegados, y señala que se incluirán a jóvenes en los cargos de dirección y candidaturas a cargos de elección popular pero no señala de manera cuantitativa dichas postulaciones.⁵⁸

En el caso de **MORENA**, en el artículo 32, inciso g) de sus Estatutos, establece que, en los casos en que así lo determine la convocatoria correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional, en función al número de consejeros y consejeras estatales, podrán agregarse una Secretaría de Jóvenes, quien se encargará de coordinar la actividad de las y los jóvenes en los comités de protagonistas de Morena en los municipios; y convertirse en vínculo de las organizaciones juveniles con el comité nacional.⁵⁹

⁵³ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pan/ESTATUTOS%20PAN.pdf>

⁵⁴ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/prd/ESTATUTOS%20PRD.pdf>

⁵⁵ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pt/ESTATUTOS%20PT.pdf>

⁵⁶ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pvem/ESTATUTOS%20PVEM.pdf>

⁵⁷ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pebc/estatutospbcc2018.pdf>

⁵⁸ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pmc/estatutosmc.pdf>

⁵⁹ <https://ieebc.mx/archivos/partidos/pmcorena/ESTATUTOS%20MORENA%20FRACC%20II.pdf>

En lo que respecta al **Partido Encuentro Social de Baja California**, en el artículo 89 de sus Estatutos contempla la organización denominada "Encuentro de Jóvenes", con un rango de edad de 15 a 29 años, en donde establece su ámbito de participación, señalando que se procurará presentar propuestas al Comité Directivo Estatal para cargos de elección popular en las que se contemple al 10% de candidaturas para Jóvenes.⁶⁰

Ahora bien, el **Partido Encuentro Solidario**, en el artículo 108 de sus Estatutos contempla la organización denominada "Encuentro de Jóvenes", con un rango de edad de 15 a 29 años, en donde establece su ámbito de participación, señalando que se procurará presentar propuestas al Comité Directivo Estatal para cargos de elección popular en las que se contemple al 10% de candidatas y candidatos Jóvenes.⁶¹

En lo que respecta al **Partido Redes Sociales Progresistas**, en sus Estatutos sólo contempla con organización adherente al partido a la "Organización Nacional de Jóvenes", pero no establece acciones propias para este sector, ni ámbito de participación.⁶²

Finalmente, el **Partido Fuerza Social por México**, contempla en sus Estatutos la Secretaría de los Jóvenes, sin establecer el alcance de la participación de jóvenes en los procesos electorales.⁶³

Como conclusión, del análisis normativo, se puede inferir que como órgano rector en la materia electoral se tiene la obligación de promover las condiciones para que las personas jóvenes tengan oportunidades reales y efectivas de participación en la vida política, sin ser discriminadas por su edad para garantizar la participación efectiva del sector juvenil en la vida democrática en el Estado, y respecto de los partidos políticos la obligación de establecer en su normatividad partidista no solamente la inclusión de la juventud en la vida interna, sino también postulándola a cargos de elección popular.

VII. 3 Cumplimiento de Sentencia

El Tribunal Local al dictar la sentencia que hoy se atiende, referente al Recurso de Inconformidad RI-47-2020 y acumulados, en el apartado de "**Efectos**" mandato lo siguiente:

- **Jóvenes**
(...)

⁶⁰ <https://www.ieebc.mx/documentos-generales/#1599211430984-8ca0b9de-5afb>

⁶¹ <https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/pencuentrosolidario/cpppencuentrosolidarioestatutos04092020.pdf>

⁶² <https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/predes/deppprspestatutos19102020.pdf>

⁶³ <https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/pfuerza/depppfsmestatutos19102020.pdf>

2. Se determinará la población que integra cada uno de estos grupos vulnerables de acuerdo a los parámetros nacionales y estatales.

3. Se establecerá su participación histórico político electoral en los cargos de municipales y diputaciones, para determinar la subrepresentación (postulación de candidatos por los distintos partidos políticos, e independientes, integración del Congreso y Ayuntamientos).

4. Deberán revisar el padrón electoral y listado nominal del INE sobre la distribución de ciudadanos por grupos de edad de la entidad, a nivel municipal y distrital a efectos de tener referencias de la concentración de este sector.

(...)

De la información vertida respecto al Proceso Electoral Local 2018-2019, se desprende que el porcentaje de postulación en todos los casos, ha sido menor al 15% y como consecuencia la ocupación en cargos de elección popular resultó mínima pues asciende al 7.07% y de manera evidente, mientras el rango de postulación de personas jóvenes no aumente, la probabilidad de ser electos seguirá siendo mínima, lo que se puede traducir en actos discriminatorios, pues no obstante de haber sido incluidos como candidatas y candidatos para contender en distintos cargos en el proceso pasado, en comparación con las candidaturas de un mayor rango de edad, resulta muy por debajo de la media, sin que exista alguna razón que justifique la falta de integración a las contiendas por parte de los Partidos Políticos.

Si bien existen ordenamientos legales que prohíben la discriminación por razón de edad, en relación al artículo 7 de la Constitución Local, no existe normatividad en la materia que regule o instrumente la postulación de jóvenes por los partidos políticos, y no obstante que algunos de ellos contemplan en sus Documentos Básicos el impulso de jóvenes para participar en la vida política del estado, en la mayoría de los casos resulta insuficiente, pues como ya se ha dicho antes el porcentaje de candidaturas electas no alcanza ni el 10% en los cargos de elección popular.

Considerados como un grupo de atención prioritario y con el objetivo de garantizar a las juventudes sus derechos fundamentales, entre los que se encuentran ser votado y votada, pero sobre todo para salvaguardar el principio de equidad y de igualdad de acceso a las funciones públicas de la Entidad, y en apego a la obligación que tiene este Instituto de adoptar medidas en favor de personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, los partidos políticos con acreditación o registro vigente ante el Instituto Electoral, deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a puestos de elección popular en diputaciones y municipales a personas que se encuentren en el rango de edad de los 18 a los 29 años con las salvedades contempladas por la Constitución local.

Se considera que la implementación de acciones que fomenten y propicien, en mayor medida, la participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones públicas, propiciará el respeto a los principios de igualdad y no discriminación que prevé el artículo 1º de la Constitución General, y se garantizará el pleno goce de los derechos de este grupo que como ya ha quedado evidenciado, se encuentra en situación de desventaja, ⁶⁴ por actos discriminatorios sustentados en estereotipos de edad, lo que se evidencia con las estadísticas vertidas en el apartado que antecede y que deja de manifiesto la pertinencia de adoptar acciones afirmativas que garanticen la representación activa en la política del estado a las personas jóvenes.

En virtud de ello, como Acción Afirmativa de carácter temporal, tendiente a revertir la desigualdad histórica y con la finalidad de hacer efectivos y reales los derechos político electorales de las personas jóvenes, y corregir la condición de desigualdad existente, teniendo en cuenta que la población de jóvenes en el Estado de Baja California representa el **21.24%** de la población total, y que tiene una presencia en la lista nominal del **27.27%**, se considera pertinente que:

- I. Los partidos políticos, coaliciones y candidatas y candidatos independientes postulan al menos una fórmula de mayoría relativa integrada por ciudadanas o ciudadanos cuya edad comprenda de los 18 a 29 años, en cualquiera de las cinco planillas de Municipales (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías); o en alguno de los Distritos Electorales que conforman el Estado, con las salvedades constitucionales previamente establecidas.

Respecto del establecimiento de acciones afirmativas sobre las juventudes, es relevante señalar que existen diversos criterios jurisdiccionales que han avalado la necesidad de la implementación de las mismas, tal como se señala en el SX-JRC-7/2020⁶⁵, en la que, analizando una acción similar a la aquí planteada, establece:

...cierto que no se afecta la facultad de autogobierno de los institutos políticos cuando permanece intocada su libertad para planificar y definir la integración de sus candidaturas conforme a sus propias metas y proyectos, a fin de conseguir el triunfo en los procesos comiciales.

...sino que se trata de la instrumentación de la interpretación del parámetro mínimo para calificar el cumplimiento de las obligaciones de igualdad y no discriminación de las personas jóvenes en la vida política.

⁶⁴ Jurisprudencia 30/2014 ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.

⁶⁵ Disponible en <https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0007-2020.pdf> pág. 52, 53, 55

127. Así, los partidos políticos en el estado de Tabasco cuentan con plena libertad para determinar la manera que, a través del cumplimiento de sus propias normativas y cuotas intrapartidarias, cumplirán con los porcentajes de candidaturas, en el caso de jóvenes, que exige la medida que establece en los Lineamientos para su registro.

...

En la especie se trata de un piso mínimo que no le impide ni excluye del cumplimiento de sus propias normas y acciones para incluir personas jóvenes, por lo que en forma alguna se afecta su esfera de autogobierno.

Atento a lo expuesto, esta autoridad electoral resalta que la medida adoptada satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional legítimo en virtud de que corresponde a las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de carácter político electoral, lo que se traduce en el establecimiento de determinadas obligaciones a los partidos políticos, para incentivar la participación de personas jóvenes en la vida democrática del Estado, específicamente procurando la maximización del ejercicio de sus derechos político-electorales de votar y ser votadas en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación popular.

La acción afirmativa que se instrumenta es idónea, porque la medida adoptada es adecuada para construir un diseño que garantice el derecho de las personas jóvenes habitantes en el Estado, para acceder a candidaturas a cargos de representación popular -acorde con la argumentación antes desarrollada-, y sin que esta autoridad electoral advierta vías distintas para concretar el avance en el ejercicio del derecho a ser votadas que en favor de las personas jóvenes se persigue a través de la presente determinación.

Asimismo, la medida detallada se considera necesaria, en atención a que la Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas jóvenes, específicamente por lo que hace a garantizar su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la legislación por sí sola no es suficiente para compensar y proteger el ejercicio de derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de desventaja, lo que hace necesario implementar mecanismos que optimicen los alcances protectores de la legislación para concretar la tutela sus derechos.

La medida que se implementa es proporcional, pues no se estima excesiva, al no constituir una limitación absoluta de ejercicio de derechos, antes bien es conveniente a lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas jóvenes, en atención a que por primera vez se implementan mecanismos para garantizar y promover el acceso de este grupo de la población a un techo mínimo de

candidaturas a cargos de representación popular respecto de la integración del Congreso Local y los Ayuntamientos, con lo que se pretende garantizar su participación activa en la integración de los órganos legislativos del Estado.

La medida que se instrumenta constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos y coaliciones en libertad para que, conforme con su propia autodeterminación y autoorganización, de ser el caso, puedan postular más candidaturas a cargos de elección popular, dentro de los parámetros de edad definidos para esta acción afirmativa, a fin de favorecer la progresividad y optimización del ejercicio del derecho a ser votadas de las personas jóvenes.

VIII. DISPOSICIONES APLICABLES A ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Ahora bien, estas nuevas acciones afirmativas que se están aprobando serán aplicables tanto a los Partidos Políticos como a Candidaturas Independientes. En tal sentido, los y las actuales aspirantes a candidaturas independientes que alcancen el porcentaje a favor deberán realizar los ajustes necesarios a sus respectivas planillas para observar las nuevas disposiciones en materia de acciones afirmativas, tal como a continuación se advierte:

I. De la acción afirmativa en favor de Pueblos y Comunidades Indígenas: Se deberán realizar los ajustes para cumplir, por lo menos, con la postulación de **una fórmula de mayoría relativa de regidurías** para cualquier municipio.

II. De la acción afirmativa en favor de las Juventudes; Se deberán realizar los ajustes para cumplir, por lo menos, con la postulación de **una fórmula de mayoría relativa** en cualquiera de las cinco planillas de munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías) de personas jóvenes en el rango de 18 a 29 años, con la excepción contenida en el artículo 23 de los lineamientos para el cargo de la presidencia municipal.

III. De la acción afirmativa en favor de Personas con Discapacidad y de las Comunidades LGBTTIQ+: Se deberán realizar los ajustes para cumplir, por lo menos, con la postulación de **una fórmula de mayoría relativa** en cualquiera de las cinco planillas de munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías) **con personas que pertenezcan a cada uno de estos grupos en situación de vulnerabilidad** en los términos de los artículos 23 bis y 23 ter de los Lineamientos.

VIII. 1 TEMPORALIDAD PARA LAS MODIFICACIONES

En ese tenor, se considera que las personas aspirantes a las candidaturas independientes al cargo de municipales se encuentran en oportunidad de realizar modificaciones a sus planillas a fin de observar las nuevas determinaciones en materia de igualdad sustantiva para la postulación de candidaturas en el proceso electoral que nos ocupa.

Esto derivado de lo establecido en el artículo 4 y 33 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California⁶⁶, así como de lo establecido en la jurisprudencia 21/2016⁶⁷ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro "Registro de candidaturas independientes. Es un acto administrativo electoral constitutivo de derechos y obligaciones, sin efectos retroactivos", de las que se deriva que, una vez obtenido el registro como candidatura independiente, al constituirse como un acto jurídico creador de obligaciones y derechos, se encuentra prohibido el realizar modificaciones a las planillas registradas.

Cabe señalar que la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución del expediente SG-JDC-198/2019 ha referido al respecto que,

...Agregó que resultaba aplicable al caso concreto lo dispuesto en la acción de inconstitucionalidad número 42/2014 y sus acumuladas, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual resolvió que las candidaturas independientes representaban el ejercicio un derecho ciudadano personalismo, y que por tanto ante la ausencia de la persona que haya sido registrada de manera individual para contender sin partido, carecía de sentido proseguir con la candidatura, pues ésta se generó en virtud de un derecho que no puede ni debe adscribirse a otro sujeto, y que lo mismo acontece en el caso de que el registro

66 La Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California establece en su artículo 4 que, Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la presente Ley, tienen derecho a ser registrados como Candidatos Independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar los siguientes cargos de elección popular (...), mientras que el artículo 33 establece que, Los Candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.

67 Jurisprudencia 21/2016 con el rubro REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL CONSTITUTIVO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTIVOS.- De la interpretación sistemática de los artículos 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo electoral de registro de candidaturas, por regla general, tiene la característica de ser un acto constitutivo de derechos y obligaciones, porque precisamente a partir de su celebración se crean consecuencias jurídicas en materia electoral. De tal suerte, la candidatura independiente no se adquiere ipso jure, automáticamente, por ministerio de ley, o por la sola intención o manifestación unilateral de la persona que pretende ser registrada, sino que, para adquirir esa calidad y tener los derechos y deberes correspondientes, se requiere de un acto jurídico de la autoridad electoral, por el cual, previo a la verificación de los requisitos que establece la ley, se otorgue la posibilidad de participar en la contienda respectiva. Así, el registro se constituye como el momento jurídico-procesal en el cual se materializa el derecho de una persona, tanto a participar en un proceso electoral determinado a través de una candidatura, como a tener acceso a las prerrogativas, así como a las obligaciones específicas inherentes. Por ello, dicho acto administrativo se debe regir por la lógica jurídica de los actos constitutivos, esto es, que a partir de su celebración se crean derechos y obligaciones hacia el futuro, razón por la cual carece de efectos retroactivos el registro de candidaturas independientes, máxime que en la normativa aplicable no se advierte que exista previsión en contrario. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 45 y 46.

respectivo se haya llevado a cabo mediante formula o planilla pues, en estos supuestos siguen involucrados derechos personalísimos que son ejercidos de manera conjunta, de forma que la ausencia de alguno de sus integrantes no permite hacer una sustitución parcial.

***énfasis en negritas añadido**

En este orden de ideas, se considera que los aspirantes a candidaturas independientes pueden realizar los ajustes a las planillas para impactar en las mismas a ciudadanas o ciudadanos que pertenezcan a las categorías sospechosas⁶⁸ incluidas en las nuevas acciones afirmativas.

De lo anterior, se considera que será la solicitud de registro de candidaturas el límite legal para realizar una modificación a la planilla que acompañara a las posibles candidaturas independientes al cargo de munícipes, por lo que es factible el solicitar se realicen las modificaciones correspondientes de acuerdo a los efectos adicionados al proyecto de dictamen de mérito.

El funcionamiento del sistema electoral mexicano se encuentra regulado en diversas normas, que establecen la forma en que se desarrolla el ejercicio de los derechos fundamentales a votar y ser votado.

En tal sentido, la Constitución General en su artículo 35 fracción II, establece que el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las ciudadanas y ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

La disposición antes citada, se replica en el artículo 5 apartado A de la Constitución local y en el mismo sentido, el artículo 135 de la Ley Electoral, dispone que corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esa ley.

Ahora bien, conforme a los artículos 41, Base I, de la Constitución General y 34 numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, entre los cuales se encuentran los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

68 Son denominadas así aquellas contenidas en el último párrafo del artículo 1º Constitucional; sirve de referencia el criterio jurisprudencial CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1a. CCCXV/2015 (10a.); 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación).

Por lo anterior expuesto, la Comisión somete al Órgano de Dirección Superior, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. En cumplimiento a la Sentencia RI-47/2020 y acumulados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se aprueban las acciones afirmativas para los Pueblos y Comunidades Indígenas, Comunidades LGBTTTIQ+, Personas con Discapacidad y de las Juventudes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Baja California, que como anexo único forma parte del presente Dictamen.

SEGUNDO. Incorpórense las acciones afirmativas a los *"Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California"*, previamente aprobados en el Dictamen Número Siete de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

TERCERO. Las presentes modificaciones, entrarán en vigor y surtirán efectos a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo General.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido del presente dictamen en las distintas plataformas y redes sociales institucionales.

QUINTO. Notifíquese al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para acreditar el cumplimiento de la Sentencia RI-47/2020; acompañando copia certificada de este dictamen y su anexo.

SEXTO. Notifíquese al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la siguiente manera: a la Sala Superior, para acreditar el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente SUP-REC-28/2019; y, a la Sala Guadalajara, para acreditar el cumplimiento de la sentencia SG-JRC-24/2019; acompañando en ambos casos copia certificada de este dictamen y sus anexos.

SEPTIMO. Publíquese el dictamen y su anexo 1 en la página de internet del Instituto Estatal Electoral, en términos del artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior.

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

**COMISIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA
Y NO DISCRIMINACIÓN**

**C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO
PRESIDENTA**

**C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ
VOCAL**

**C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA
VOCAL**

**C. JUDITH ESMERALDA ACOSTA VIERA
SECRETARÍA TÉCNICA**

GAC/OVMS/AAMP/JEAV/cpr**

ANEXO ÚNICO

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNIDADES LGBTTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS JUVENTUDES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Artículo 20. De las acciones afirmativas en favor de Pueblos y Comunidades Indígenas. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, se encuentran obligados a asignar candidaturas indígenas que cumplan con el principio de paridad de género.

Para la postulación deberán atender lo siguiente:

- I. **Presencia indígena.** El Instituto Electoral con base en la información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2020, identificó que los mayores porcentajes de población indígena se concentran en los municipios de Ensenada y San Quintín, siendo este último el que ocupa el primer lugar de población indígena con un 30.50% y el Distrito Electoral XVII es en el que concentra el mayor número de población indígena con un 22.91%.
- II. **De los Ayuntamientos.** La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las planillas de regidurías de mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos indígenas, en cualquiera de las cinco planillas de Municipios.
- III. **En Diputaciones.** La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos indígenas, en alguno de los Distritos Electorales que integran el Estado.
- IV. **Revisión de las postulaciones.** Cada postulación deberá cumplir con los requisitos legales, el Instituto Electoral revisará cada postulación bajo una perspectiva intercultural.
- V. **No limitación de la acción afirmativa indígena.** La postulación de las candidaturas que se establece en este artículo no son limitativas, por lo que adicionalmente los partidos políticos podrán incluir más candidaturas indígenas en las postulaciones que realicen por el principio de mayoría relativa.

Artículo 23. Acción afirmativa en favor de las Juventudes. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en armonía con el principio de paridad de género, deberán postular al menos una fórmula de mayoría relativa integrada por ciudadanas o ciudadanos cuya edad comprenda de los 18 a 29

años, en cualquiera de las cinco planillas de Munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos Electorales que conforman el Estado, con salvedad al cargo de presidencia municipal, en el que se requiere tener 25 años cumplidos al día de la elección.

Artículo 23 BIS. Acción afirmativa en favor de Personas con Discapacidad. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en armonía con el principio de paridad de género deberán postular al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos con alguna discapacidad, en cualquiera de las cinco planillas de Munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos que conforman el Estado.

Los partidos políticos deberán garantizar que la fórmula de personas con discapacidad al momento de su registro:

- I. Se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos políticos.
- II. Presente algún documento original que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad, en la que se deberá especificar el tipo de discapacidad (física, sensorial, mental o intelectual) y que la misma es de carácter permanente, aunado a que deberá contener el nombre, firma autógrafa y número de cédula profesional de la persona médica que la expide, así como el sello de la institución o en su caso exhibir original y copia fotostática del anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y la misma deberá estar vigente.

El cumplimiento de estos requisitos deberá verificarse al momento de resolver sobre la procedencia de solicitud de registro. En ningún caso, la verificación o valoración se realizará respecto de la naturaleza o gradualidad de la discapacidad.

Artículo 23 TER. Acción afirmativa en favor de las Comunidades LGBTTTIQ+. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, en armonía con el principio de paridad de género deberán postular al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por ciudadanas o ciudadanos de las Comunidades LGBTTTIQ+, en cualquiera de las cinco planillas de Munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los Distritos que conforman el Estado.

Para acreditar la calidad de las Comunidades LGBTTTIQ+ será suficiente con la sola auto adscripción que de dicha circunstancia realice las personas candidatas.

En caso de que se postulen Personas Trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que en la solicitud de registro de candidatura el partido político deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual con el propósito de constatar el cumplimiento de la nominación de la candidatura que atiende la acción afirmativa y de las cuestiones relativas a la paridad de género.

En caso de Coaliciones Parciales o Flexibles, las personas de la diversidad sexual postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

Artículo 30. (Derogado).